



CC.AA. CANTABRIA NUM. SUS. 001

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
J. SECC. REGIMEN INTERIOR
DIPUT. REG. DE CANTABRIA

SANTANDER
D. P. 39003
CANTABRIA

Boletín Oficial de Cantabria

Año LVII

Jueves, 18 de febrero de 1993. — Número 35

Página 729

SUMARIO

I. DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA

3. Otras disposiciones

3.2 Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.— Orden por la que se descalifica vivienda sita en esta provincia, de protección oficial; expediente para ampliación y reforma de vivienda unifamiliar en Cudón (Miengo), y rectificación de error	730
---	-----

II. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2. Otras disposiciones

Autoridad Portuaria de Santander.— Rectificación de error	730
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.— Expedientes alta tensión números 77/92, AP/LS y 114/92 ..	730
Delegación del Gobierno en Cantabria.— Expedientes números 445/92 y 497/92	731
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.— Expediente sancionador	732

III. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2. Subastas y concursos

Junta Vecinal de Bárcena.— Subasta de aprovechamientos maderables de pinos	733
--	-----

3. Economía y presupuestos

Santander.— Notificación de embargo	733
Marina de Cudeyo, Reocín, Limpias, Arnuelo y Rionansa.— Ordenanzas fiscales diversas	734

4. Otros anuncios

Santander.— Exposición al público de expediente de cesión de una parcela en Monte	747
Medio Cudeyo.— Exposición al público estudio de detalle	747
San Felices de Buelna.— Licencia para la actividad de estabulación de ganado	747

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2. Anuncios de Tribunales y Juzgados

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.— Actos administrativos impugnados	747
Juzgado de lo Social Número Uno de Cantabria.— Expedientes números 1.161/91, 160/93, 693/92, 581/92, 544/92 y 1.238/91	750
Juzgado de lo Social Número Dos de Cantabria.— Expedientes números 1.232/91, 1.046/91 y 327/92 ..	751

I. DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y URBANISMO

ORDEN de 22 de diciembre de 1992, por la que se descalifica la vivienda sita en esta provincia, de protección oficial.

Visto el expediente S-I-29/70, en orden a la descalificación voluntaria promovida por don Modesto Lastra Echevarría de la vivienda sita en Muriedas, calle José Barros, 2-6.º D;

Resultando que la citada vivienda figura inscrita como finca independiente en el Registro de la Propiedad Número Dos de Santander, al libro 225, folio 147, finca número 24.858 de Camargo;

Resultando que con fecha 18 de junio de 1974 fue calificada definitivamente, habiéndosele concedido los beneficios de exenciones tributarias;

Considerando que la duración del régimen legal de las viviendas de protección oficial, al que está acogida esta vivienda, es de cincuenta años, conforme determina el artículo 2.º de su Ley, aprobada por Decreto 2.131/63 y artículo 100 del Reglamento de 24 de julio de 1968, desde su calificación definitiva;

Considerando que los propietarios de viviendas de protección oficial que no quisieran seguir sometidos por más tiempo a las limitaciones que impone su régimen, podrán solicitar la descalificación voluntaria de las mismas, a la que se podrá acceder con las condiciones y requisitos expresados en los artículos 147, 148 y 149 del Reglamento de 24 de julio de 1968;

Considerando que se han acreditado fehacientemente ante la Dirección Regional de Urbanismo y Vivienda el haberse reintegrado los beneficios recibidos, no constando, por otra parte, se deriven perjuicios para terceras personas al llevarse a efecto esta descalificación, y

Vistos el apartado 2.º del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.131/63, de 24 de julio, los artículos 148 y 149 del Reglamento de 24 de julio de 1968 y las disposiciones transitorias quinta del Real Decreto Ley 31/78, de 31 de octubre, y octava del Real Decreto 3.148/78, de 10 de noviembre, y final primera de igual texto legal, y por último, el Real Decreto 1.667/84, de 1 de agosto, por el que se transfieren estas competencias a la Diputación Regional de Cantabria,

Esta Consejería ha acordado descalificar la vivienda de protección oficial, descrita en el párrafo primero de la presente Orden, solicitada por su propietario, don Modesto Lastra Echevarría

Lo que participo a vuestra ilustrísima para conocimiento y efectos.

Santander, diciembre de 1992.—El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, José Martín Soleta Pérez.

92/100866

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y URBANISMO

Servicio de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2, del Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública por período de quince días, el expediente promovido por don Román Luis Sánchez Martínez para la ampliación y reforma de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Cudón (Miengo).

La documentación correspondiente queda expuesta durante dicho plazo en la Secretaría de la Comisión Regional de Urbanismo (calle Vargas, 53, 8.ª planta).

Santander a 27 de octubre de 1992.—El secretario de la Comisión Regional de Urbanismo, José Emilio Misas Martínez.

92/87389

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y URBANISMO

Rectificación de error

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 27, de 8 de febrero de 1993, en la página 554, en el sumario de la Orden para la descalificación de una vivienda aparece por error:

Donde dice: «...en Mies del Valle, 14-1.º izquierda...».

Debe decir: «...en avenida de Los Castros, 67-4.º F...».

Lo que se publica a los efectos oportunos. Santander, 12 de febrero de 1993.

II. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2. Otras disposiciones

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

Rectificación de error

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 28, de 9 de febrero de 1993, en la página 581, en el anuncio referente al proyecto para la concesión de una parcela, aparece publicado lo siguiente:

Donde dice: «...en el plazo de treinta días hábiles...».

Debe decir: «...en el plazo de veinte días hábiles...».

Lo que se hace público a los efectos oportunos. Santander, 12 de febrero de 1993.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Dirección Provincial de Industria y Energía en Cantabria

Instalaciones eléctricas alta tensión.

Autorización administrativa.

Declaración, en concreto, de utilidad pública

Expediente A. T. 77/92 AP/LS.

Asunto: Ampliación de red de baja tensión del sector 41 «Arenilla».

Visto el expediente incoado en esta Dirección Provincial de Industria y Energía en Cantabria, a instancia de «Iberdrola 1, S. A.», solicitando autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para las instalaciones que se detallarán, y cumplidos los trámites establecidos en el capítulo III del Decreto 2.617/1966 y capítulo 3º del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, esta Dirección Provincial ha resuelto:

Autorizar a «Iberdrola 1, S. A.», las instalaciones siguientes:

Ampliación de la red de baja tensión del sector número 41 «Arenillas».

Longitud: 469 metros.

Apoyos: 9, de hormigón.

Situación: Castro Urdiales.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones que se autorizan, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el capítulo IV del Decreto 2.617/1966.

Santander, 18 de enero de 1993.—El director provincial, Felipe Bigeriego de Juan.

93/7102

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Dirección Provincial de Industria y Energía en Cantabria

Autorización administrativa de instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de la instalación eléctrica cuyas características especiales se señalan a continuación:

Expediente número A. T. 114/92.

Peticionaria: «Iberdrola 1, S. A.».

Lugar donde se va a establecer la instalación: Término municipal de Castro Urdiales.

Finalidad de la instalación: Atender la petición de «Vallegón, S. A.».

Características principales: Variante entre apoyos 9 y 12 de la línea eléctrica aérea de 30 kV, Santullán-Guriez.

Procedencia de materiales: Nacional.

Presupuesto: 5.152.887 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección Provincial de Industria y Energía, Servicio de Energía, sita en Castelar, 1, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones por duplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 12 de enero de 1992.—El director provincial, Felipe Bigeriego de Juan.

93/5398

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

EXP. Nº 445/92

PROVIDENCIA de apertura de Expediente sancionador y designación de Instructor y Secretario.

VISTA la denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de fecha 26.9.91 se observa infracción a la vigente normativa sobre juegos de suerte, envite o azar, en los que aparece usted como presunto responsable.

En consecuencia, se procede a incoarle **EXPEDIENTE SANCIONADOR**, con arreglo a lo preceptuado en el art. 7.2.a) de la Ley 34/87 de 26 de diciembre, procediendo a nombrar Instructor a D. Javier LOPEZ VARGAS, Da. Mercedes ALVAREZ BRU y D. Miguel Angel YAGUE GARCIA, como titular y suplentes respectivamente, si por causa legal cesara el primero, y como Secretaria a Da. Amelia GARCIA FIDALGO.

Lo que comunico a Vd. a los efectos legales oportunos.

Madrid, 15 de junio de 1.992

EL DIRECTOR DEL GABINETE TECNICO DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO

Lo que se hace público en este Diario Oficial a los efectos de notificación previstos en el artº 80.3. de la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que D. Ambrosio González Durán, se encuentra en paradero desconocido, Santander, 1 de febrero de 1.993. EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANTABRIA, FERNANDO ORELLANA MALLAVIA.

PUBLIQUESE EN EL B.O.C.,
EL SECRETARIO GENERAL.



Acordada la incoación de Expediente Sancionador a D. Ambrosio GONZALEZ DURAN y a D. José Ignacio ESTEFANIA LOBATO por supuesta infracción de la vigente Normativa sobre el Juego, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Instalación y explotación por D. Ambrosio GONZALEZ DURAN en el Bar EL RINCON sito en Castrourdiales (Cantabria) de una maquina de juego sin homologar carente de todo tipo de documentación, de las denominadas MINI TOMBOLA de su propiedad, según Acta del Servicio de Vigilancia Aduanera de fecha 26.9.91 lo que supone infracción de los artículos 6, 15, 16, 22, 23, 48, 49 y 52 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 593/1990, de 27 de abril, tipificada como muy grave en el art. 60, apartado/s 2 a), b) y 3 a), b), c) de dicha norma, en relación con el art. 2, apartado/s a) de la Ley 34/87, de 26 de diciembre.

Permitir o consentir por D. José Ignacio ESTEFANIA LOBATO dicha instalación y explotación en su calidad de titular del Bar anteriormente mencionado, lo cual infringe el/los artículo/s 22, 23, 48, 49 y 52 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 593/1990, de 27 de abril, tipificada como muy grave en el art. 60, apartado/s 2c) de dicha norma, en relación con el art. 2, apartado/s d) de la Ley 34/87, de 26 de diciembre.

En su virtud se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de OCHO DIAS HABILES pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el art. 7.2.d) de la Ley 34/87, de 26 de Diciembre.

Madrid, 15 de junio de 1.992. EL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE, JAVIER LOPEZ VARGAS.

Lo que se hace público en este Diario Oficial a los efectos de notificación previstos en el artº 80.3. de la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que D. Ambrosio González Durán, se encuentra en paradero desconocido, Santander, 1 de febrero de 1.993. EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANTABRIA, FERNANDO ORELLANA MALLAVIA.



Incoado Expediente Sancionador nº 445/92 según Providencia de fecha 15.6.92 en base al Acta del Servicio de Vigilancia Aduanera de fecha 26.9.91 en la que se constata la explotación de una maquina de juego sin homologar por D. Ambrosio GONZALEZ DURAN, carente de todo tipo de documentación en el Bar EL RINCON sito en Castrourdiales (Cantabria), C/ Mar, 4, habiéndose permitido dicha explotación por D. José Ignacio ESTEFANIA LOBATO en su calidad de titular del Bar anteriormente referido, se ORDENA la Medida Cautelar de PRECINTO Y DEPOSITO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.4 del Real Decreto 593/1990 de 27 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y del art. 9.1 de la Ley 34/87 de 26 de diciembre.

Contra este acto el interesado podrá interponer ante el Secretario de la Comisión Nacional del Juego en el plazo de un mes, Recurso de Reposición, con los requisitos señalados en el artículo 52 de la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, de 27 de diciembre de 1956.

Madrid, 15 de junio de 1.992

EL SECRETARIO DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO, FRANCISCO CRUZ DE CASTRO.

Lo que se hace público en este Diario Oficial a los efectos de notificación previstos en el artº 80,3, de la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que D. Ambrosio González Durán, se encuentra en paradero desconocido, Santander, 1 de febrero de 1.993. EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANTABRIA, FERNANDO ORELLANA MALLAVIA.

PUBLIQUESE EN EL B.O.C.
EL SECRETARIO GENERAL.



93/14212

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

Exp. Nº 497/92

VISTO el expediente sancionador arriba referenciado; incoado a D. D. Francisco DELGADO GUTIERREZ, domiciliado TORRELAVEGA (Cantabria).

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Mediante Providencia de fecha 20.8.92, el Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional del Juego, a la vista de los hechos denunciados que constan en el expediente, que se dan por reproducidos en aras a la brevedad, y conforme a lo dispuesto en el art. 7.2.a) de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador, procediendo asimismo a la designación de Instructor y Secretario, habiéndose formulado por aquél el oportuno pliego de cargos, en el que, sustancialmente, se reproducen los hechos denunciados, otorgándoseles la calificación de falta muy grave.

SEGUNDO: Notificado el pliego de cargos, la parte inculpada no presentó los correspondientes descargos, y una vez practicadas las informaciones y pruebas estimadas pertinentes, con el resultado que obra en el expediente, por el Instructor se procedió a formular propuesta de resolución en el sentido de que por esta Comisión se sancionara al/los inculpa-do/s con multa de 100.000 ptas. (CIEN MIL PESETAS).

TERCERO: Cumplimentado el trámite de notificación de la referida propuesta de resolución, la parte inculpada no formuló las alegaciones que a su derecho estimó convenientes.

CUARTO: Con base en el expediente instruido se estiman probados los siguientes hechos:

Permitir o consentir, en su calidad de titular del Bar-Cafetería LA NARANJA, sito en TORRELAVEGA (Cantabria), la instalación y explotación de 1 máquina de juego sin homologar, carente de todo tipo de documentación.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

NUMERO I.: Los hechos enjuiciados suponen infracción de los arts. 22, 23, 48, 49 y 52 del Real Decreto 593/1990, de 27 de abril, que aprobó el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, vieniendo tipificados los mismos como falta muy grave en el art. 60, apartado 2.c) todos ellos en relación con el art. 2º, apartado d) de la Ley 34/87, de 26 de diciembre, de Potestad Sancionadora de la Administración Pública en materia de Juegos de Suerte, Envite o Azar.

NUMERO II.: Constituye consecuencia lógica del carácter clandestino atribuible a la máquina indocumentada, la facultad que a la autoridad sancionadora concede el art. 5.6 de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, para decretar en estos casos el comiso y la destrucción de la(s) máquina(s) objeto de la infracción.

NUMERO III.: El artículo 5.7 de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, concede a la Administración el poder discrecional necesario para graduar la cuantía de la sanción cuando las circunstancias económicas, personales y sociales que incidan en los hechos examinados lo haga necesario.

NUMERO IV.: Aunque la infracción cometida hay que calificarla por imperativo legal como de muy grave la aplicación del principio de proporcionalidad que ha de informar tanto en el ámbito penal como en el sancionador administrativo nos obliga en la presente resolución a imponer una multa de 100.000 ptas. (CIEN MIL PESETAS) y no de 5.000.000 ptas., cantidad mínima fijada para sancionar conforme a la normativa vigente infracciones de carácter muy grave, dado que se han tenido en cuenta las circunstancias personales y materiales que han concurrido, por entender que es más ajustada a derecho.

NUMERO V.: Es competente para resolver el Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional del Juego, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 26 de abril de 1.990 (B.O.E. 2.6.90) de dicha Comisión atribuyendo a su Presidente la competencia para imponer sanciones económicas por cada infracción de carácter muy grave entre una cantidad superior a 6.000.0000 e inferior a 15.000.000 de pesetas o accesorias de suspensiones, cierres o inhabilitaciones de locales por tiempo superior a un año e inferior a tres años, y a su Secretario la competencia para imponer sanciones económicas hasta el límite de 6.000.000 y accesorias hasta un año, todo ello en virtud de la habilitación que a la Comisión Nacional del Juego otorga el artículo 5 de la Ley 34/87 antes citada.

VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación,

RESUELVO sancionar a D. Francisco DELGADO GUTIERREZ con multa de 100.000 ptas. (CIEN MIL PESETAS), acordándose, igualmente, el comiso y destrucción de la máquina.

La sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo de pago voluntario ante el Gobierno Civil de la provincia de su domicilio, o en caso contrario, se procederá a su exacción por la vía de apremio, deparándole los perjuicios de la Ley.

Contra la presente Resolución podrá interponerse ante el Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional del Juego recurso de Reposición, previo a la vía Contencioso-Administrativa, en el plazo de un mes y con los requisitos señalados en los artículos 52 y siguientes de la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, de 27 de diciembre de 1.956.

Madrid, 2 de diciembre de 1.992

EL SECRETARIO DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO (Resolución de 26.04.1990)



Lo que se hace público en este Diario Oficial a los efectos de notificación previstos en el artº 80.3. de la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que D. Francisco Delgado Gutierrez, se niega a firmar esta Resolución, Santander, 3 de febrero de 1.993, EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANTABRIA, FERNANDO ORELLANA MALLAVIA.

PUBLIQUESE EN EL B.O.C.
EL SECRETARIO GENERAL.



93/14215

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Dirección General de Costas

Demarcación de Costas de Asturias

ANUNCIO

Por el presente anuncio se hace pública la Resolución de fecha 25 de septiembre de 1992 del expediente sancionador incoado a don Baldomero Miguel Alonso, en el que, de las actuaciones practicadas, ha quedado de manifiesto la realización de obras de desescombro interior y derribo de un edificio abandonado, correspondiente al antiguo «Teatro Benavente», situado sobre el río Carrocedo, en Llanes, y el vertido de escombros al río, en zona sensible a las mareas.

Esta Demarcación de Costas de Asturias ha resuelto:

1º Imponer una multa de novecientos cincuenta mil (950.000) pesetas, de conformidad con el artículo 99 de la repetidamente citada Ley 2/1988, a ingresar en el Tesoro Público, según lo determinado en el artículo 191 del Reglamento General para la aplicación de la Ley de Costas, por la realización de obras en dominio público marítimo terrestre, debiendo presentar el justifi-

cante de su pago en la Demarcación de Costas de Asturias, en el plazo de veinte días desde que sea firme en vía administrativa la presente Resolución.

Del incumplimiento de las obligaciones económicas indicadas se dará traslado a la Delegación de Hacienda para su cobro por vía de apremio, en aplicación del Reglamento General de Recaudación y del artículo 107.1 de la Ley de Costas.

2.º Suspender definitivamente las obras.

Contra la presente Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al del recibo de la presente notificación, ante el ilustrísimo señor director general de Costas, a presentar a través de esta Demarcación de Costas de Asturias, sin que dicha interposición signifique la suspensión de la ejecución del acto.

Lo que se hace público a los efectos previstos en la legislación vigente.

Oviedo a 21 de enero de 1993.—El ingeniero-jefe, Alejandro Checa Ladrón.

93/12217

III. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2. Subastas y concursos

JUNTA VECINAL DE BÁRCENA

(Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo)

ANUNCIO

Al día siguiente hábil, una vez transcurridos los veinte también hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria», tendrá lugar en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, la celebración de la subasta que a continuación se indica:

—1.421 pinos, aforados en 1.112 metros cúbicos de madera, al sitio denominado Cabaña Gallofas, en el monte Cotorro, Cirra y Cerajal, número 383-ter del C. U. P., perteneciente a la Junta Vecinal de Bárcena y bajo el precio de licitación de 4.781.600 pesetas.

La presentación de plicas tendrá lugar en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, hasta las doce horas del día anterior hábil al de la celebración de la subasta.

La garantía provisional consistirá en el 2% del tipo base de licitación y la definitiva ascenderá al 10% del importe del remate.

De resultar en sábado el día de la celebración de la subasta, se trasladará al siguiente día hábil.

Si quedara desierta esta subasta, se celebrará una segunda, al décimo día hábil de aquélla, a la misma hora y sitio.

Se cumplirán las condiciones técnico-facultativas dispuestas en el pliego general (Resolución de 24 de abril de 1975, «Boletín Oficial del Estado», de 21 de agosto de 1975) y en el pliego especial para aprovechamientos maderables («Boletín Oficial de la Provincia», de 20 de agosto de 1975). Asimismo se cumplirán las condiciones específicas determinadas por el Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza.

Modelo de proposición

Don..., con documento nacional de identidad número..., expedido en..., a..., de..., de..., con domicilio en..., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de...) en relación con la subasta anunciada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número..., de fecha..., para el aprovechamiento de..., en el monte de..., ofrece la cantidad de... (en letra y cifra) pesetas.

Fecha y firma del proponente.

Bárcena de Toranzo a 29 de enero de 1993.—El presidente (ilegible).

93/11143

3. Economía y presupuestos

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Recaudación de Tributos Municipales

Notificación de embargo en el Registro de la Propiedad

HEMÍTIDO AL B.O.C. POR NEGARSE A FIRMAR EL TITULAR

En el expediente ejecutivo de apremio administrativo que se le instruye en esta Recaudación a Dña. M: PILAR GABARRI JIMENEZ, D.N.I. -- 13.744.790, soltera, por débitos a la Hacienda Municipal por los conceptos de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, años 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991 he dictado con fecha de hoy la siguiente:

"DILIGENCIA: Desconociéndose la existencia de otros bienes embargables al deudor objeto de este expediente capaces de solventar los descubiertos que tiene para con el Excmo. Ayuntamiento de Santander, -- declaro el embargo de la finca del deudor que a continuación describo:

RUSTICA: TIERRA en Monte, Ayuntamiento de Santander, sitio de la Martiñiega, de cabida, cinco carros y medio, o sea, ocho áreas veinticinco centiáreas, que linda: Norte; Lorenzo Camus y Valentina Guerra; Sur, - Valentín Montes; Este, carretera; y al Oeste, Visitación Toca.

Se halla inscrita al libro 947, folio 124, finca 50024-N.

El importe por el que se grava esta finca en virtud del presente embargo es de CIENTO SIETE MIL SEISCIENTAS NUEVE pesetas de principal, VEINTIUNA MIL QUINIENTAS VEINTIDOS pesetas del recargo de apremio del 20%, CINCUENTA MIL pesetas presupuestadas para intereses de demora y CIEN MIL pesetas presupuestadas para costas y gastos del procedimiento, en junto DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNA PESETAS. Del citado embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad a favor del Excmo. Ayuntamiento de Santander".

En concordancia con lo establecido en el número 2 del art. 124 del Reglamento General de Recaudación, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a su cónyuge y a los acreedores hipotecarios en su caso, librese según previene el art. 125 de dicho Texto Legal el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévase a cabo las actuaciones pertinentes y remisión en su momento de este expediente a Tesorería para la autorización de la subasta conforme a los artículos 145 y 146 del citado Reglamento.

Contra este acto que se le notifica, podrá formular Recurso de Reposición ante los Organos de Recaudación y en el plazo de un mes, a contar desde su notificación. Una vez resuelto expresamente, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de resolución del Recurso de Reposición. Transcurrido un mes desde la interposición del Recurso de Reposición sin que notificare su resolución se entenderá desestimado y el plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrativo será de un año, desde la fecha de presentación del Recurso de Reposición, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime conveniente.

Santander, a 29 de Enero de 1993.

EL RECAUDADOR-AGENTE EJECUTIVO,



93/13447

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Recaudación de Tributos Municipales

Notificación de embargo en el Registro de la Propiedad

REMITIDO AL B.O.C. POR SER DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO.

En el expediente ejecutivo de apremio administrativo que se le instruye en esta Recaudación a D. JESUS M. ROJO CRUZADO DNI. 14680858, - soltero, por débitos a la Hacienda Municipal por los conceptos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Licencia Fiscal Industrial, años 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991 he dictado con fecha de hoy la siguiente:

"DILIGENCIA: Desconociéndose la existencia de otros bienes embargables al deudor objeto de este expediente capaces de solventar los descubiertos que tiene para con el Excmo. Ayuntamiento de Santander, de claro el embargo de la finca del deudor que a continuación describo:

URBANA: NUMERO SESENTA Y CINCO.- PISO TERCERO letra A, el primero a la mano izquierda según se sube por la escalera, sito en la planta quinta-natural del edificio, con acceso por la escalera izquierda del portal - único, de un edificio construido sobre el solar señalado con los números siete y nueve de la calle de Juan de la Cosa, de esta ciudad. Tiene una superficie aproximada de setenta y ocho metros y noventa y un decímetros cuadrados, distribuida en hall, pasillo, cocina, cuarto de baño, aseo, salón-comedor y tres dormitorios. Linda: al Norte, calle San Martín; al Sur, patio interior, caja y descanso de escalera y piso letra C de su misma planta y escalera; al Este, patio interior y piso letra D, de su misma planta, de la escalera derecha; y al Oeste, casa número cinco de la calle Juan de la Cosa.

Se halla inscrita al libro 714, folio 9, finca 59541.

El importe por el que se grava esta finca en virtud del presente embargo es de OCHOCIENTAS CUARENTA Y UNA MIL DOSCIENTAS DIECISIETE pesetas de principal, CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO pesetas del recargo de apremio del 20%, CUATROCIENTAS MIL pesetas presupuestadas para intereses de demora y CIEN MIL pesetas presupuestadas para costas y gastos del procedimiento, en junto UN MILLON QUINIENTAS NUEVE MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y UNA PESETAS. Del citado embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad a favor del Excmo. Ayuntamiento de Santander".

En concordancia con lo establecido en el número 2 del art. -- 124 del Reglamento General de Recaudación, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a su cónyuge y a los acreedores hipotecarios en su caso, librese según previene el art. 125 de dicho Texto Legal el oportuno mandamiento al Sr, Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión en su momento de este expediente a la Tesorería para la autorización de la subasta conforme a los artículos 145 y 146 del citado Reglamento.

Contra este acto que se le notifica, podrá formular Recurso de Reposición ante los Organos de Recaudación y en el plazo de un mes, a contar desde su notificación. Una vez resuelto expresamente, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de resolución del Recurso de Reposición. Transcurrido un mes desde la interposición del Recurso de Reposición sin que notificare su resolución se entenderá desestimado y el plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrativo será de un año, desde la fecha de presentación del Recurso de Reposición, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime conveniente.

Santander, a 9 de Febrero de 1993.

EL RECAUDADOR-AGENTE EJECUTIVO,



Handwritten signature of the tax collector.

93/13445

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de imposición y modificación de las Ordenanzas reguladoras de los recursos municipales que en el anexo se transcriben, no habiéndose presentado reclamaciones dentro de citado plazo, dicho acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio y de los textos íntegros en el «Boletín Oficial de Cantabria»

ANEXO
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2º.-

- 1. El tipo de gravamen sobre bienes inmuebles aplicables a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0.65.
2. El tipo de gravamen sobre bienes inmuebles aplicables a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0.40.
3. De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes cuyos valores catastrales hayan sido objeto de revisión o modificación será:
*Tratándose de bienes de naturaleza urbana el 0.40
*Tratándose de bienes de naturaleza rústica el 0.20

DISPOSICION FINAL

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 1993 previa su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria", permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

PRECIO PUBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOMICILIO

Artículo 6º.- TARIFAS

La cuantía del precio regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas que se contienen en el siguiente apartado:
* Hasta un mínimo de 6 metros cúbicos/més : 50 pts/m3
* De 6 metros cúbicos por exceso: 60 pts/m3
* Conservación de contador: 25 ptas.

DISPOSICION FINAL

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 1993 previa su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria", permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 3º.- Tarifas

Las cuantías de los precios regulados en esta Ordenanza, serán los fijados en el siguiente apartado, por trimestre:
*Viviendas: 1.200 pts
*Locales: a) Bar 1º: 3.750 pts c) Restaurantes: 3.750 pts
b) Bar 2º: 2.250 pts d) Supermercados: 3.750 pts
*Sanatorios: 10.000 pts
*Industrias: a) Talleres: 2.250 pts b) Otros: 7.500 pts
*Otros locales: 1.500 pts
*Hoteles: 7.500 pts
*Sociedades Deportivas: 7.500 pts

DISPOSICION FINAL

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 1993 previa su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria", permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 4º.- Tarifas:

Cuota fija anual para viviendas..... 2.000 pts
Cuota fija anual (Bares restaurantes industrias)..4.000 pts

DISPOSICION FINAL

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 1993 previa su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria", permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TASA DE ENGANCHE A LA TRAJIDA DE AGUAS

Artículo 7º.-

Las tasas que correspondan aplicar se sujetarán a las siguientes Tarifas:
a) Cuota fija por cada acometida, sin perjuicio del resto de los gastos: 35.000 pesetas/enganche

DISPOSICION FINAL

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 1993 previa su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria", permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TASA DE ENGANCHE A LA RED DE SANEAMIENTO

Tarifas: Por enganche a la red municipal de Alcantarillado:
Cuota fija: 35.000 pesetas/ enganche.

DISPOSICION FINAL

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 1993 previa su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria", permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Marina de Cudeyo, 5 de febrero de 1993

el Alcalde,



Handwritten signature of the Mayor, Hilario Trueta Bedia.

93/14243

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

ANUNCIO

No habiéndose formulado reclamación alguna contra la Ordenanza General de Recaudación durante el periodo de exposición al público, se eleva la misma a definitiva, publicándose su texto íntegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO LOCALES

SECCION 1ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 - Objeto

1.- La presente Ordenanza General, dictada al amparo de lo previsto en el art. 106.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, contiene normas comunes, tanto sustantivas como procesales, que se considerarán parte integrante de las Ordenanzas Fiscales y de los Reglamentos Interiores que se puedan dictar relativos a la gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales.

2.- Se dicta esta Ordenanza para:

- Regular aquellos aspectos comunes a diversas Ordenanzas Fiscales, evitando así la reiteración de los mismos.
- Regular las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte del Ayuntamiento.
- Recopilar en único texto las normas municipales complementarias cuyo conocimiento pueda resultar de interés general.

Artículo 2 - Normativa aplicable

1.- De conformidad con lo que disponen los arts. 5.E de la Ley 7/1.985 y 12 de la Ley 39/1.988, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos públicos locales se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la legislación estatal, por lo que las normas dictadas por el Ayuntamiento en uso de su potestad reglamentaria en ningún caso pueden contravenir lo dispuesto en aquella.

2.- A los solos efectos aclaratorios y de facilitar la actuación de los servicios competentes para su aplicación, se establece en los puntos siguientes la prelación de normas.

3.- En cuanto a la gestión de tributos, se aplicará:

- Las normas contenidas en esta Ordenanza General y en las Ordenanzas Fiscales específicas del Tributo de que se trate.
- La Ley 39/1.988 y normas concordantes.
- La Ley General Tributaria.

4.- En cuanto a la gestión de otros ingresos de derecho público no tributarios, se aplicará:

- Las normas contenidas en esta Ordenanza.
- Los preceptos contenidos en la legislación específica reguladora del recurso de que se trate, ya sea municipal, autonómica o estatal.
- La Ley General Presupuestaria.

5.- En cuanto a la recaudación de los créditos tributarios y demás de derecho público locales, serán de aplicación:

- La presente Ordenanza.
- El Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1.990, de 20 de diciembre.
- Las Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria.

Artículo 3 - Ambito de aplicación

1.- La presente Ordenanza, así como las Ordenanzas Fiscales, obligarán en el término municipal de Reocín y se aplicarán de acuerdo con los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.

2.- Por Decreto del Alcalde se podrá emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de esta Ordenanza y de las Ordenanzas reguladoras de cada exacción.

Artículo 4 - Fecha de aprobación y vigencia

Esta Ordenanza aprobada por el Consejo Pleno en sesión de 16 de Noviembre de 1992, empezará a regir el 1 de enero de 1993 y continuará vigente mientras no se acuerde su derogación o modificación.

SECCION 2ª- NORMAS SOBRE GESTION

SUBSECCION 1ª - GESTION DE TRIBUTOS

CAPITULO I - DE VENCIMIENTO PERIODICO

Artículo 5 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles

1.- El padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se elaborará en base al padrón catastral formado por la Gerencia Territorial del C.G.C.C.T. al que

se incorporarán las alteraciones consecuencia de hechos o actos conocidos por el Ayuntamiento y en los términos convenidos con el C.G.C.C.T.

2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad desde el día primero del año siguiente, pudiendo incorporarse en el padrón correspondiente a este período dichas variaciones si de las mismas no ha derivado modificación de la base imponible.

3.- A efectos de determinar las cuotas tributarias que deben figurar en el padrón, se aplicarán los tipos impositivos aprobados por el Ayuntamiento y, en su caso, el coeficiente de actualización de valores catastrales aprobado por Ley de Presupuestos Generales del Estado. No será preciso proceder a la notificación individualizada de tales modificaciones puesto que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación.

Artículo 6 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

1.- El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se formará en base al padrón del año anterior, incorporando las altas y los efectos de otras modificaciones (transferencias, cambios de domicilio y bajas) originadas en el ejercicio inmediatamente anterior.

2.- Será sujeto pasivo del impuesto la persona física o jurídica que figure como titular del vehículo en el Registro Central de Tráfico, debiendo tributar en el Municipio que consta como lugar de residencia en el permiso de circulación.

3.- A efectos de determinar las Tarifas a que se refiere el art. 96 de la Ley 39/88 se considerará potencia del vehículo la resultante de aplicar la fórmula establecida por el art. 260 del Código de la Circulación.

4.- Para obtener la deuda tributaria que constará en el padrón, sobre las tarifas citadas en el punto anterior se aplicará el coeficiente de incremento aprobado en la Ordenanza Fiscal.

5.- No será preciso proceder a la notificación individualizada de las modificaciones originadas por variación del coeficiente de incremento, o variación del cuadro de tarifas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley Estatal de general y obligatoria aplicación.

Artículo 7 - Impuesto sobre Actividades Económicas

1.- El padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas se elaborará en base a la matrícula de contribuyentes formada por la Administración Estatal, incorporando las alteraciones consecuencia de hechos o actos conocidos por el Ayuntamiento y en los términos convenidos con las Delegación de Hacienda.

2.- Sobre las cuotas mínimas, fijadas por la Administración Estatal, se aplicarán el coeficiente de incremento e índices de situación, aprobados por el Ayuntamiento al amparo de lo que autorizan los artículos 88 y 89 de la Ley 39/1.988.

3.- Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificación de los coeficientes referidos en el punto anterior, o por variación de las Tarifas del impuesto aprobadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, no precisarán de notificación individualizada, ya que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación.

Artículo 8 - Tasas

1.- Los padrones se elaborarán en base al padrón del ejercicio anterior, incorporando las modificaciones derivadas de la variación de tarifas aprobadas en la Ordenanza Fiscal, así como otras incidencias que no constituyan alteración de los elementos esenciales determinantes de la deuda tributaria y que fueran conocidas por el Ayuntamiento.

2.- Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificación de las tarifas contenidas en la Ordenanza Fiscal no precisan de notificación individualizada, en cuanto dicha Ordenanza ha sido expuesta al público y tramitada reglamentariamente.

Artículo 9 - Aprobación de padrones

1.- Los padrones se elaborarán por el Departamento de Informática, correspondiendo al Departamento de Rentas y Exacciones la verificación de los mismos y a la Intervención de Fondos su fiscalización y toma de razón.

2.- La aprobación de los padrones es competencia de la Comisión de Gobierno.

3.- La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez haya recaído el acuerdo referido en el apartado anterior.

Artículo 10 - Calendario fiscal

1.- Con carácter general, se establece que los periodos para pagar los tributos de carácter periódico serán los siguientes:

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**
Desde el día 1 de febrero al 31 de marzo.
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Tasas**
Desde el día 1 de mayo hasta el 30 de junio.
- Impuesto sobre Actividades Económicas**
Desde el día 1 de octubre hasta el 30 de noviembre.

2.- Las variaciones en los periodos de pago reseñados en el punto anterior serán aprobadas por la Comisión de Gobierno, no admitiéndose la prórroga de los mismos salvo que concurren circunstancias excepcionales.

Artículo 11 - Exposición pública

1.- Conocido el calendario fiscal, el Alcalde ordenará su publicación, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento en el que consten los siguientes extremos:

a) Los períodos de pago de los tributos municipales de vencimiento periódico, correspondientes al ejercicio de 1993 y siguientes, serán fijados por la Comisión de Gobierno, en las fechas que se indiquen al comienzo del ejercicio.

b) Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas municipales quince días antes de iniciarse los respectivos períodos de cobro y por un período de un mes.

c) Las cuotas y demás elementos tributarios en cuanto no constituyen altas en los respectivos registros, sino que hacen referencia a un hecho imponible ya notificado individualmente al sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo de lo que prevé el art. 124.3 de la Ley General Tributaria.

d) Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones en los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de exposición pública.

Artículo 12 - Anuncios de cobranza

1.- El anuncio del calendario fiscal regulado en el artículo anterior podrá cumplir, además de la función de dar a conocer la exposición pública de padrones, la función de publicar el anuncio de cobranza a que se refiere el art. 88 del Reglamento General de Recaudación.

Para que se cumpla tal finalidad deberán constar también los siguientes extremos:

e) Medios de pago: dinero de curso legal o cheque nominativo a favor del Ayuntamiento.

f) Lugares de pago: En las entidades colaboradoras que figuran en el documento de pago, o en las oficinas municipales.

g) Transcurridos los períodos de pago relacionados en el apartado a), las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Artículo 13 - Liquidaciones por altas

1.- En relación a los tributos de cobro periódico, a que se refieren los artículos 5, 6, 7 y 8, se practicará liquidación de ingreso directo cuando:

a) Por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden originar la obligación de contribuir.

b) El ayuntamiento conoce por primera vez de la existencia del hecho imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

c) Se han producido modificaciones en los elementos esenciales del tributo distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la variación de tipos impositivos recogida en las Ordenanzas Fiscales.

2.- En cuanto a la aprobación, contabilización y notificación de las liquidaciones a que se refiere este artículo, será de aplicación el régimen general regulado en los artículos 15 y 16.

3.- Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se notificarán colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos, en la forma regulada en el artículo 11.

CAPITULO II - DE VENCIMIENTO NO PERIODICO

Artículo 14 - Práctica de liquidaciones

1.- En los términos regulados en las Ordenanzas Fiscales, y mediante aplicación de los respectivos tipos impositivos, se practicarán liquidaciones de ingreso directo cuando, no habiéndose establecido la autoliquidación, el Ayuntamiento conoce de la existencia de hecho imponible por los siguientes tributos.:

a) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

c) Contribuciones especiales.

d) Tasas en los supuestos de primera o única solicitud de servicios.

2.- Las liquidaciones a que se refiere el punto anterior serán practicadas por el Departamento de Rentas y fiscalizadas por la Intervención.

3.- La aprobación de las liquidaciones compete a la Alcaldía, a cuyos efectos se elaborará una relación resumen de los elementos tributarios, en la que deberá constar la toma de razón de la Intervención.

4.- La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez haya recaído el acuerdo de aprobación referido en el punto anterior.

Artículo 15 - Notificación de las liquidaciones

1.- Para notificar las liquidaciones tributarias a que se refiere el artículo 14, se expedirá un documento de notificación en el que deberán constar:

a) Elementos esenciales de la liquidación.

b) Medios de impugnación, plazos de interposición de recursos y lugares donde deber ser presentados.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

2.- Los documentos descritos en el punto anterior se dirigirán al domicilio señalado por el interesado para recibir notificaciones y, en su defecto, al que constare en los archivos municipales.

3.- Consecuencia del primer intento de notificación puede suceder:

a) Que la notificación sea entregada al interesado, en cuyo caso el notificador debe retornar al Ayuntamiento el acuse de recibo conteniendo la firma del receptor y la fecha en que tiene lugar la recepción.

b) Que la notificación se entregue a persona distinta del interesado, en cuyo caso deberán constar en el acuse de recibo la firma e identidad de la persona que se hace cargo de la notificación, el parentesco de la misma con el interesado o la razón de su permanencia en el domicilio.

c) Que no sea posible entregar la notificación, en cuyo caso el notificador registrará en la tarjeta de acuse de recibo el motivo que ha imposibilitado la entrega, así como el día y hora en que ha tenido lugar el intento de notificación.

4.- En el supuesto del punto 3c, relativo al intento de notificación personal con resultado infructuoso, se procederá a la realización de un segundo intento, en día y hora diferentes a aquellos en que tuvo lugar el primer intento. El resultado de este segundo intento puede ser triple, al igual que en el punto 3 y del mismo deberá quedar la debida constancia en la tarjeta de acuse de recibo que será retornada al Ayuntamiento.

5.- En todo caso, a la vista del acuse de recibo devuelto al Ayuntamiento, deberá ser posible conocer la identidad del notificador.

6.- La entrega material del documento-notificación podrá realizarse por el Servicio de Correos, por notificador municipal, o mediante personal perteneciente a empresa con la que el Ayuntamiento haya contratado el Servicio de distribución de notificaciones, al amparo de lo que autoriza el artículo 3.c del Real Decreto 1005/1.974, regulador de los contratos de asistencia técnica.

Artículo 16 - Publicación en el B.O.P.

1.- De resultar también sin efecto el segundo intento de notificación, a que se refiere el artículo anterior en su punto 4, se dejará aviso en el buzón del inmueble señalado como domicilio, en el que se dará conocimiento al interesado del acto correspondiente y de la subsiguiente publicación mediante edictos en el B.O.P. y demás lugares reglamentarios, indicándose además la fecha aproximada en que dicho trámite se llevará a efecto, con cuyos requisitos la notificación se entenderá válidamente practicada. El aviso deberá contener, asimismo, la indicación al interesado de la posibilidad de personación, por sí o mediante representante, para ser notificado en la sede del órgano gestor, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación en el B.O.P.

2.- De las actuaciones realizadas conforme a lo anteriormente señalado, deberá quedar constancia en el expediente, así como de cualquier circunstancia que hubiere impedido la entrega en el domicilio señalado para la notificación.

CAPITULO III - CONCESION DE BENEFICIOS FISCALES

Artículo 17 - Solicitud

1.- La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se ajustará a la normativa específica de cada tributo, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.

2.- Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida al Alcalde, que deberá acompañarse de la fundamentación que el solicitante considere suficiente.

3.- Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus efectos comenzarán a operar desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a la adopción del acuerdo de concesión del beneficio fiscal.

Artículo 18 - Tramitación

1.- El Servicio de Gestión Tributaria tramitará el expediente, elaborando propuesta de resolución que informada por Intervención se elevará al Alcalde, a quien compete adoptar el acuerdo de concesión o denegación del beneficio fiscal.

2.- La Intervención establecerá el procedimiento para verificar que se cumple la caducidad de beneficios fiscales, cuando ha llegado su término de disfrute.

Artículo 19 - Petición de informes

1.- En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, recibida en el Ayuntamiento solicitud de beneficio fiscal, su contenido será analizado por el Servicio de Gestión Tributaria, que formulará propuesta de resolución. Dicha propuesta se remitirá a la Gerencia Territorial del C.G.C.T., en la forma convenida, a efectos de solicitar el informe técnico preceptivo que en cumplimiento del art. 78.2 de la Ley 39/88 aquella debe emitir.

2.- Transcurrido un mes desde la fecha en que el Ayuntamiento remite la documentación anterior, sin obtener respuesta, se entenderá que el informe es positivo y se podrá elevar la propuesta a acuerdo del Alcalde continuando la tramitación del expediente.

3.- En relación al Impuesto sobre Actividades Económicas, deberá solicitarse informe de la Delegación de Hacienda sobre procedencia de la concesión de beneficios fiscales en aquellos supuestos en que los mismos tengan carácter rogado, formulándose propuesta de resolución una vez conocido dicho informe.

4.- Se aplicará de oficio la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas cuando se trate de actividades empresariales, profesionales o artísticas ejercidas por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, así como por los organismos autónomos locales de carácter administrativo.

5.- Los informes técnicos a que se refieren los puntos 1 y 3 de este artículo no tendrán carácter vinculante.

CAPITULO IV - PROCEDIMIENTOS DE REVISION

Artículo 20 - Interposición de recursos

1.- Contra los actos administrativos de aprobación de los padrones, aprobación de las liquidaciones y concesión o denegación de beneficios fiscales, los interesados pueden interponer ante el mismo órgano que los dictó recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la notificación expresa o la exposición pública de los correspondientes padrones.

2.- Contra la denegación del recurso de reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes:

- Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.
- Si no hubiese resolución expresa, en el plazo de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición.

3.- La interposición del recurso regulado en el punto 1 no requiere el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite la suspensión del procedimiento, en cuyo supuesto será indispensable aportar garantía que cubra el total de la deuda.

Artículo 21 - Revisión de actos nulos

1.- El Pleno del Ayuntamiento podrá declarar la nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria cuando:

- Hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente.
- Se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

2.- El procedimiento de nulidad a que se refiere este artículo podrá iniciarse por acuerdo del órgano que dictó el acto, o a instancia del interesado.

3.- En el procedimiento serán oídos aquellos a cuyo favor reconoció derechos el acto, que se pretende anular.

Artículo 22 - Otros motivos de revisión

1.- El Pleno del Ayuntamiento podrá revisar los actos dictados en vía de gestión tributaria cuando se encontraran en estos supuestos:

- Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se estime que infringen manifiestamente la Ley.
- Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible ignorados por el Ayuntamiento al dictar el acto objeto de la revisión.

Artículo 23 - Rectificación de errores materiales

1.- El Ayuntamiento rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales y los aritméticos, siempre que no hubiese transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.

2.- Tramitado el expediente en que se justifique la necesidad de proceder a la rectificación, el Servicio de Gestión Tributaria formulará propuesta de acuerdo rectificatorio, que informada por la Intervención, deberá ser aprobada por el mismo órgano que dictó el acto objeto de rectificación.

Artículo 24 - Procedimiento de declaración de lesividad

1.- Si el Ayuntamiento considerase preciso anular sus propios actos declarativos de derechos, por motivos diferentes a los recogidos en los artículos anteriores, para su revisión se requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa.

CAPITULO V - DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

Artículo 25 - Iniciación

1.- Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda.

2.- No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá acordarse de oficio la devolución en los supuestos siguientes:

- Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea anulada por cualquiera de los motivos y procedimientos regulados en el capítulo anterior.
- Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago.

Artículo 26 - Tramitación del expediente

1.- Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la resolución de un recurso, o de la anulación o revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria, el reconocimiento de aquel derecho corresponde al mismo órgano que ha aprobado el acto administrativo que lo origina.

2.- En otro supuesto, el reconocimiento del derecho a la devolución será aprobado por el Alcalde.

3.- El expediente administrativo procedente se tramitará por el Servicio de Gestión Tributaria, salvo en los supuestos de duplicidad de pago, en que corresponderá dicha tramitación a la Tesorería.

4.- Con carácter previo a la adopción del acuerdo de reconocimiento del derecho a la devolución, la Intervención fiscalizará el expediente, verificando especialmente que con anterioridad no se había operado devolución de la cantidad que se solicita y que en el expediente consta el documento original acreditativo del pago.

Sólo en circunstancias excepcionales podrá sustituirse la carta de pago original por certificado de ingreso del Ayuntamiento.

Artículo 27 - Colaboración de otra Administración

1.- Cuando la devolución que se solicita hace referencia a un tributo que fue gestionado por otra Administración, será preciso acreditar que, con anterioridad, no se había procedido a la devolución del mismo; a este fin, se solicitarán los antecedentes precisos.

2.- Si la resolución del expediente exigiera la previa resolución de reclamación interpuesta contra una liquidación resultante de elementos tributarios fijados por otra Administración, el Servicio de Gestión Tributaria efectuará la remisión de documentación que considere suficiente al órgano competente, de lo cual dará conocimiento al interesado.

Artículo 28 - Devolución material

1.- Cuando, dentro del período voluntario de pago, se haya satisfecho la deuda más de una vez y se solicite la devolución del ingreso indebido, el interesado podrá solicitar en la Dependencia Municipal de Recaudación el pago de la cantidad indebidamente ingresada, aportando los documentos originales acreditativos del pago.

2.- Verificada la duplicidad del ingreso material en arcas municipales, el Tesorero autorizará la inmediata devolución.

3.- En supuestos diferentes del referido en el punto 1, el reconocimiento del derecho a la devolución originará el nacimiento de una obligación reconocida, que como tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación de pago y pago material, de aplicación común para la realización de las deudas municipales.

SUBSECCION 2ª - GESTION DE CREDITOS NO TRIBUTARIOS

CAPITULO I - PRECIOS PUBLICOS

Artículo 29 - De cobro periódico

1.- Los precios públicos de vencimiento periódico se gestionarán a partir de la matrícula de contribuyentes, formada en base a los datos declarados por los mismos en el momento de solicitar la utilización de los bienes de dominio público, o la prestación de servicios.

2.- Las modificaciones en las cuotas que respondan a variación de las tarifas contenidas en la respectiva Ordenanza no precisarán de notificación individualizada.

3.- El período de pago voluntario con carácter general, se fija entre el día 1 de octubre y el 30 de noviembre, pudiendo ser modificado por acuerdo de la Comisión de Gobierno.

4.- Las notificaciones se practicarán colectivamente, mediante edictos, procediéndose a la exposición pública de la matrícula de contribuyentes y a la publicación del anuncio de cobranza, en términos similares a los regulados para recursos tributarios en los artículos 11 y 12

Artículo 30 - De vencimiento no periódico

1.- Deberá practicarse liquidación individualizada en los siguientes supuestos:

- Cuando se ha formulado una solicitud de utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público local que, al tener carácter continuado, origina un alta en el registro de contribuyentes.
- Cuando se solicita la utilización privativa o prestación de servicios sin continuidad en el tiempo, constituyendo actos singulares.

2.- Las liquidaciones a que se refiere el punto anterior deberán notificarse personalmente, cosa que se efectuará en cuanto sea posible en las propias dependencias municipales; de cuya circunstancia se advertirá al sujeto pasivo en el momento de la presentación de su solicitud

3.- En el supuesto del anterior apartado 1.a), una vez notificada el alta en el registro de contribuyentes, las sucesivas liquidaciones se notificarán y exaccionarán, como deudas de vencimiento periódico que son, en la forma regulada en el punto 4 del artículo anterior.

4.- El período de pago voluntario será el que, en cada caso, establezca la Ordenanza, que figurará indicado en el documento de pago.

Artículo 31 - Inicio período ejecutivo

El período ejecutivo y el procedimiento administrativo de apremio se inician para las liquidaciones previamente notificadas - en forma colectiva o individual - no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.

Artículo 32 - Repercusión de IVA

1.- No procederá efectuar repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido en las liquidaciones de precios públicos que se practiquen por la utilización privativa, o aprovechamiento especial de bienes de dominio público local.

2.- En las liquidaciones de precios públicos practicadas por la prestación de servicios, procederá repercutir IVA cuando tales servicios puedan ser prestados por la iniciativa privada y tengan mínima entidad.

3.- Cuando se exaccione como contraprestación de la realización de funciones de naturaleza pública no se repercutirá IVA, siempre que el servicio se preste directamente, en alguna de las formas previstas en el artículo 85.3 de la Ley 7/1.985

CAPITULO II - MULTAS DE CIRCULACION**Artículo 33 - Denuncias**

1.- Cuando se cometan infracciones por acciones u omisiones contrarias a lo preceptuado en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motos y Seguridad Vial, aprobada por R.D.L. 339/1.990, el agente municipal denunciará los hechos, tipificando la infracción y su sanción, de acuerdo con el cuadro de sanciones aprobado por el Ayuntamiento.

2.- Si fuese posible, se notificará en el acto al conductor, de cuyo hecho deberá obrar constancia en el expediente.

3.- Si la notificación del punto anterior no se pudiera practicar, por ausencia del conductor u otras circunstancias, se notificará la denuncia a la persona que figura como titular del vehículo en el Registro de Tráfico, dirigiendo dicha notificación al domicilio figurado en dicho Registro.

4.- En la notificación referida en el punto anterior, se hará constar que si el titular del vehículo no era el conductor del mismo en el momento de la infracción, está obligado a comunicar al Ayuntamiento la identidad del infractor en el plazo de quince días, resultando que el incumplimiento de esta obligación puede ser sancionado como falta grave.

Artículo 34 - Notificación de la denuncia

1.- Se llevará a cabo por el procedimiento descrito en el artículo 15, que para mayor claridad se resume en los puntos siguientes:

1.- Si no resultó posible la notificación personal en el instante de la infracción, se intentará notificar individualmente en el domicilio que consta en el Registro de Tráfico, salvo que en los archivos municipales conste otro domicilio declarado por el titular, en cuyo caso se utilizará éste.

2.- Si en el primer intento resulta posible entregar la notificación, en la tarjeta de acuse de recibo constará fecha de entrega, firma del receptor y, si fuera diferente al titular, parentesco con el mismo, o razón de permanencia en su domicilio.

La tarjeta acreditativa de la entrega deberá ser devuelta al Ayuntamiento a la mayor brevedad posible, en orden a posibilitar el puntual tratamiento informático.

3.- Si en el primer intento de notificación, no hubiera resultado posible su entrega, se realizará un segundo intento en día y hora diferentes. En caso de que el resultado de este segundo intento sea positivo, se constatará en la tarjeta de acuse de recibo las circunstancias referidas en el apartado anterior, procediendo al retorno de la misma al Ayuntamiento.

4.- Si el segundo intento también hubiera resultado infructuoso, se depositará en el buzón del domicilio el documento-notificación que también es apto para poder pagar la multa en cualquier entidad colaboradora.

En dicho documento se reflejará el hecho de que, habiéndose realizado varios intentos de notificación en su domicilio con resultado negativo, se procederá a la publicación mediante edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

5.- La publicación de edictos en el B.O.P. se realizará dos veces al mes, en días fijos, circunstancia que será divulgada para general conocimiento.

6.- Tanto en el documento-notificación depositado en el buzón como en el edicto publicado, se hará constar la posibilidad de personación por parte del interesado para conocer de su expediente.

Artículo 35 - Alegaciones

1.- De conformidad con lo previsto en el art. 79 de la Ley de Seguridad Vial, pueden formularse alegaciones en el plazo de quince días contados desde la fecha de notificación de la denuncia. Si en este trámite el titular comunicara la identidad del conductor infractor, se notificará la denuncia a éste en la misma forma establecida en el artículo anterior.

2.- Vistas las alegaciones presentadas e informes de los agentes denunciadores, por el Jefe de la Guardia Urbana se elevará a la Alcaldía propuesta de resolución.

3.- Si la propuesta formulada consistiere en estimar las alegaciones, de su contenido se trasladará copia inmediata a la Tesorería a fin de que no prosigan las actuaciones recaudatorias.

Artículo 36 - Imposición de sanciones

1.- Cuando no se hubieran formulado alegaciones, o las mismas hubieran sido desestimadas, el Alcalde impondrá la sanción que correspondiese dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la denuncia.

Si dicha notificación no se hubiera podido practicar, el plazo anterior se contará desde la última actuación del Ayuntamiento encaminada a averiguar la identidad o domicilio del presunto infractor.

2.- La imposición de sanción se notificará por el mismo procedimiento regulado en el artículo 15.

3.- Las sanciones adquirirán firmeza en vía administrativa en los momentos siguientes:

a - Cuando haya pasado un mes desde la notificación de la sanción sin que se haya interpuesto recurso de reposición.

b - Cuando se notifica la resolución desestimatoria del recurso de reposición.

4.- En el caso de interposición de recurso, no se podrá entender que la sanción ha adquirido firmeza en tanto no se notifique expresamente la resolución de aquel.

Artículo 37 - Pago de la multa

1.- Las sanciones de multa, cuando no se trata de una infracción que origine la suspensión de licencia de conducir, podrán hacerse efectivas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la denuncia con una reducción del 20 por 100.

2.- Desde el día undécimo siguiente a la notificación de la denuncia y hasta quince días después de que la sanción adquiera firmeza se podrá pagar la multa en su importe nominal. Esta previsión, en relación a lo establecido en el artículo 36.3 de esta Ordenanza significa el cumplimiento de estos plazos:

- Fecha denuncia: X
- Fecha notificación denuncia: Y ($Y \leq X + 2$ meses)
- Fecha imposición sanción: Z ($Z \leq Y + 2$ meses)
- Fecha notificación sanción: A
- Fecha notificación resolución recurso contra sanción: B

a) - Fecha pago multa con reducción 20%: Desde Y hasta Y + 10 días.

b) - Fecha pago multa (nominal)

b.1 - si no se ha recurrido la sanción.

desde (A + 1 mes) hasta (A + 1 mes + 15 días)

b.2 - Si se ha recurrido la sanción, desde B hasta (B + 15 días)

3.- Vencidos los plazos de ingresos establecidos en los puntos b.1 y b.2 del apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, liquidándose el recargo del 20% sobre el nominal de la multa.

Artículo 38 - Prescripción de la multa

1.- De acuerdo con el artículo 81.2 de la Ley de Seguridad Vial, las sanciones una vez que adquieran firmeza, prescriben al año.

2.- Las multas de circulación prescribirán al año de la fecha en que las sanciones han adquirido firmeza, plazo determinado en el punto 3 del artículo 36 de esta Ordenanza.

3.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las actuaciones administrativas encaminadas a la ejecución de las multas y comunicadas al obligado, interrumpirán la prescripción por período de un año.

Artículo 39 - Resolución de recursos

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.1 de la Ley de Seguridad Vial, la responsabilidad por infracciones de tráfico recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción; como consecuencia de este principio de responsabilidad personal, no proseguirán las acciones de cobro que pudieran haberse iniciado contra persona diferente.

2.- La resolución de recursos formulados contra la certificación de descubierto y providencia de apremio, se ajustará a los criterios definidos en los artículos siguientes.

Artículo 40 - En cuanto se ha notificado la denuncia a persona distinta del propietario.

1.- Cuando se ha notificado la denuncia a quien, figurando como titular en el Registro de Tráfico, alega que no era el conductor en el momento de la infracción y además acredita que en dicho instante no era propietario del vehículo, se estimará la alegación, procediendo a la anulación de la providencia de apremio y la retroacción del expediente al momento de la notificación de la denuncia.

2.- La retroacción citada se efectuará al amparo de lo previsto en el artículo 81 de la Ley de Seguridad Vial, cuando prevé que las actuaciones de la Administración, de las que tenga conocimiento el interesado, encaminadas a averiguar su identidad o domicilio, impiden la apreciación de una posible causa de prescripción.

3.- La notificación de denuncia habrá de tener lugar en el plazo de dos meses desde que el Ayuntamiento conoce la identidad del propietario.

4.- El Alcalde podrá imponer la sanción pecuniaria prevista en el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial, como autor de falta grave, al no haber identificado al propietario y presunto responsable en el momento procedimental oportuno, sin causa justificada.

Artículo 41 - En cuanto se sigue procedimiento contra persona distinta del conductor

1.- Cuando habiéndose notificado la denuncia a quien en el Registro de Tráfico figura como titular y que no objeta dicha titularidad, se impugna la providencia de apremio fundamentando la disconformidad en que el notificado no era conductor en el momento de la infracción se actuará así:

- a - Si la acreditación es irrefutable y se manifiesta la identidad del conductor, se estimará el recurso, procediendo a notificar la denuncia al infractor.
- b - Si no se dan las circunstancias anteriores, el recurso será desestimado.

2.- Será de aplicación lo previsto en el artículo 40.4 de esta Ordenanza.

Artículo 42 - En cuanto se alega la no concurrencia del interesado

1.- Cuando el interesado alega no haberse encontrado en el lugar y momento en que se produjeron los hechos que motivaron la sanción, se le requerirá para que en el plazo de diez días aporte las pruebas acreditativas de las circunstancias alegadas.

2.- De no formalizarse este trámite en tiempo y forma, se entenderá decaído en su derecho y proseguirá la tramitación del expediente.

Artículo 43 - En cuanto se alega prescripción de la infracción

1.- Cuando la notificación de la denuncia no se pudiera practicar en la forma descrita en el artículo 34 y dentro del plazo de dos meses contados desde el momento de la infracción, se estimará la prescripción.

2.- Cuando la realización de actuaciones para cobrar la multa tengan lugar después del plazo establecido en el artículo 36.3, procederá aplicar la prescripción alegada, salvo que hayan tenido lugar actuaciones administrativas de las establecidas en el artículo 38.3 de esta Ordenanza.

3.- En supuestos distintos a los anteriores, y mientras las actuaciones del procedimiento se ajusten a lo previsto en la normativa vigente, procederá desestimar cualquier alegación de prescripción.

CAPITULO III - OTROS CREDITOS

Artículo 44 - Otros créditos no tributarios

1.- Además de los precios públicos y multas de circulación, cuya gestión se regula en los Capítulos 1º y 2º de esta sección, el Ayuntamiento es titular de otros créditos de derecho público, para cuya realización se dictan algunas reglas en el presente capítulo.

2.- Para la cobranza de estas cantidades, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas establecidas legalmente y podrá aplicar el procedimiento recaudatorio fijado en el Reglamento General de Recaudación; todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2. de la Ley 39/88, en relación con los artículos 31 y 32 de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 45 - Ingresos por actuaciones urbanísticas, mediante el sistema de cooperación

1.- Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística están obligados a sufragar los costes de urbanización, a cuyo efecto el Ayuntamiento liquidará cuotas de urbanización.

2.- La exacción de las cuotas de urbanización se llevará a cabo por la vía de apremio, según prevé el artículo 65 del Reglamento de Gestión Urbanística.

3.- Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán contra los bienes de los propietarios que no hubieran cumplido sus obligaciones y, en caso de insolvencia de los mismos, contra la Asociación administrativa de propietarios.

4.- Si la Asociación de contribuyentes lo solicita y el Ayuntamiento lo considera conveniente, se podrán ejercer las facultades referidas en el punto anterior a favor de la Asociación y contra los propietarios que incumplieren los compromisos contraídos con ella.

Artículo 46 - Actuaciones por el sistema de compensación

1.- Cuando la ejecución de la unidad de actuación se realice por el sistema de compensación, la Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la realización de las obras de urbanización.

2.- Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros, serán exigibles en vía de apremio por el Ayuntamiento si media petición de la Junta.

Artículo 47 - Actuaciones de conservación

1.- Si se hubieran constituido entidades de conservación urbanística, el Ayuntamiento en su condición de titular de los terrenos de dominio público, exigirá por la vía de apremio las cuotas que se adeuda a la Entidad de conservación, a solicitud de la misma.

2.- El importe de la recaudación se entregará a la Entidad encargada de la conservación, de conformidad con lo que prevé el artículo 70 de Reglamento de Gestión Urbanística.

Artículo 48 - Compensación de costes

1.- Cuando el Ayuntamiento transfiera a las Entidades a que se refieren los artículos anteriores el importe de las cuotas recaudadas, deducirá una cantidad en concepto de compensación de costes originados por el ejercicio de las funciones recaudatorias.

2.- Dicha compensación no se verá afectada por la repercusión del I.V.A., toda vez que se trata de la realización de una función pública ejercitada directamente por el Ayuntamiento.

Artículo 49 - Responsabilidades contractuales

1.- El Adjudicatario de la realización de obras municipales que ocasione daños y perjuicios como consecuencia de la ejecución de aquellas, o bien por la demora en su conclusión, vendrá obligado a indemnizar al Ayuntamiento.

2.- El importe de tal indemnización se detraerá de la fianza definitiva que hubiera constituido el Contratista, y, si la misma no alcanzara a cubrir la cuantía de la responsabilidad, se exaccionará por la vía de apremio la suma no cubierta.

Artículo 50 - Reintegros

1.- Si el Ayuntamiento concediera una subvención finalista, cuya aplicación no ha sido correctamente justificada, exigirá que se acredite el destino de la misma.

2.- Verificada la indebida aplicación, total o parcial, se requerirá el reintegro de la suma no destinada a la finalidad por que se concedió. Si tal reintegro no tiene lugar en el plazo que se señale, podrá ser exigido en vía de apremio.

3.- En el supuesto de realización de un pago indebido, tan pronto como sea conocida tal situación por la Intervención, se requerirá al perceptor para que reintegre su importe en el término que se señala. Si se incumpliese esta obligación, el reintegro se exigirá en vía de apremio.

Artículo 51 - Multas

1.- Las multas que se impongan por infracción de lo dispuesto en la legislación urbanística o en las ordenanzas de policía municipal, se exaccionarán por el procedimiento recaudatorio general regulado en la Sección 3ª de esta Ordenanza.

2.- En cuanto a plazos de prescripción, el plazo general es de un año, si bien habrá de estarse a lo que resulte de aplicación según la normativa específica de cada concepto.

Artículo 52 - Recaudación

1.- La cobranza de los ingresos de Derecho público a que se refiere este capítulo se realizará en la Tesorería de la Corporación.

2.- El Alcalde podrá autorizar la colaboración de entidades bancarias, supuesto que, en su caso, se notificará al obligado al pago.

3.- Los obligados al pago responderán con todos sus bienes presentes y futuros, salvo las limitaciones establecidas por la Ley.

4.- Esta responsabilidad se extenderá a quienes por cualquier título legal o voluntario, vengan obligados a solventar dichas deudas. Si la responsabilidad es subsidiaria, una vez se hayan declarado fallidos el deudor principal y los responsables solidarios, por resolución de la Alcaldía se aprobará la derivación de responsabilidad, a propuesta del Tesorero Municipal.

SECCION 3ª - RECAUDACION

SUBSECCION 1 - ORGANIZACION

Artículo 53 - Organos de recaudación

1.- La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de derecho público municipales se realizará directamente por el propio Ayuntamiento; con este fin se ha creado el Servicio de Recaudación Municipal, cuya Jefatura ostenta el Tesorero Municipal.

2.- El Servicio de Recaudación se estructura en las Unidades Administrativas de Recaudación Voluntaria, Recaudación Ejecutiva y Contabilidad.

3.- Corresponde a la Unidad de Recaudación Voluntaria la realización de las siguientes funciones:

- Formulación de propuestas a la Tesorería sobre mejora de los medios, circuitos y relaciones intervinientes en el procedimiento de recaudación voluntaria.

- Control y ejecución de las actuaciones necesarias para aplicar las Instrucciones internas y verificar que la recaudación en período voluntario se desarrolla de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Recaudación y en la presente Ordenanza.

4.- Corresponde a la Unidad de Recaudación Ejecutiva la realización de las siguientes funciones:

- Formulación de propuestas a la Tesorería en orden al establecimiento de circuitos de colaboración y adopción de otras medidas que puedan mejorar el procedimiento de recaudación en período ejecutivo.

- Control y ejecución de las actuaciones necesarias para lograr que la extinción de las deudas no satisfechas en período voluntario tenga lugar en el tiempo más breve posible y se realice de conformidad con lo que disponen las Instrucciones internas, el Reglamento General de Recaudación y la presente Ordenanza.

5.- Corresponde a la Unidad de Contabilidad la realización de las tareas precisas para asegurar la puntual contabilización de cuantos hechos y actos deban tener reflejo contable en las Cuentas de Recaudación en los términos establecidos en las normas internas emanadas de la Intervención y en la presente Ordenanza.

6.- Corresponde a la Intervención y a la Tesorería Municipal emanar instrucciones técnicas para desarrollar y complementar las funciones atribuidas a las Unidades de Recaudación en los apartados anteriores; sin perjuicio de las modificaciones que puedan resultar en caso de variación del Organigrama, las cuales deberán ser aprobadas por el Pleno.

Artículo 54 - Atribución competencial

En el procedimiento de recaudación en vía de apremio, las competencias y funciones que el Reglamento General de Recaudación asigna a los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda se habrán de entender referidas a los órganos municipales, según la correlación que se indica en los artículos siguientes.

Artículo 55 - Funciones del Alcalde

1.- Al Alcalde le corresponderá el ejercicio de las funciones atribuidas al Delegado de Hacienda en el Reglamento General de Recaudación. Con especial referencia a los siguientes supuestos:

- a) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/87 de 18 de mayo de conflictos jurisdiccionales, promoverá cuestión de competencias delante los Juzgados y Tribunales cuando conozcan de los procedimientos de apremio sin haber agotado la vía administrativa.
- b) Solicitud del Juez de Primera Instancia correspondiente de la autorización judicial para la entrada en el domicilio del deudor, en los supuestos de dilación en las contestaciones.
- c) Ejercicio de acciones en los supuestos que los registradores de la propiedad incumplan los términos establecidos por la Ley en la práctica de asentamientos y expedición de certificaciones que interesen al procedimiento ejecutivo.
- d) Autorización de enajenación por concurso de bienes.
- e) Solicitud a las autoridades competentes de la protección y auxilio necesario para el ejercicio de la función recaudatoria, excepto en los casos de peligro para las personas, los valores o fondos, en cuyo caso dicha solicitud podrá realizarla el propio Jefe de la Unidad.
- f) Concesión de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, a propuesta del Tesorero.
- g) Acordar la adjudicación de bienes al Ayuntamiento previa consulta a los Servicios Técnicos sobre la utilidad el mismo.
- h) Resolución de tercerías que debidamente cumplimentadas se presenten en la Unidad de Recaudación.
- i) Dictar acuerdos de derivación de responsabilidad.
- j) Autorización, si procede, de suscripción de acuerdos o convenios a que se llegue en los procesos concursales.
- k) Autorizar el procedimiento de adjudicación directa de los bienes embargados, si existen razones de urgencia o en aquellos en que no sea posible o no convenga promover la concurrencia.

Artículo 56 - Funciones del Interventor

Corresponderá al Interventor:

- 1.- Expedir las certificaciones de descubierto.
- 2.- Fiscalizar y tomar razón de los hechos o actos que supongan una modificación en los derechos reconocidos y en los ingresos recaudados municipales.
- 3.- Dirigir la Contabilidad Municipal y organizarla de tal modo que, entre otros fines previstos en la Ley 39/88, cumpla el de aportar información sobre el estado de la recaudación y la situación individualizada de los derechos y los deudores.
- 4.- Todas aquellas funciones que, según el Reglamento General de Recaudación, corresponden a la Intervención de la Delegación de Hacienda.

Artículo 57 - Funciones del Tesorero

Corresponde al Tesorero:

- a) Dictar la providencia de apremio
- b) Dirigir el procedimiento recaudatorio en sus dos fases de período voluntario y ejecutivo.
- c) Instar de los servicios internos municipales la colaboración necesaria para el correcto desarrollo de la gestión recaudatoria y en concreto la que se relaciona:
 - 1) Solicitud de información sobre bienes del deudor para el embargo.
 - 2) Solicitud de captura, depósito y precinto de vehículos a las Autoridades que tengan a su cargo vigilancia de la circulación.
 - 3) Solicitud de locales para la custodia y depósito de bienes embargados.
 - 4) Designación de funcionario técnico para la valoración de los bienes embargados.
 - 5) Informe sobre la utilidad de la adjudicación a favor del Ayuntamiento de bienes no enajenados en subasta.
 - 6) En los supuestos en que se desconozca el parador del deudor se solicitará de la alcaldía del territorio en que se presume la residencia del mismo, la certificación e informes correspondientes.
 - 7) Solicitud de designación de técnico en los supuestos que fuera necesario proceder al deslinde de los bienes inmuebles embargados.

Artículo 58 - Funciones de la Asesoría Jurídica

A la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento le corresponderán las funciones atribuidas al Servicio Jurídico del Estado, con especial referencia a los siguientes supuestos:

- a) Trámites previos para el acuerdo de derivación de responsabilidad.
- b) Dictar informes previos sobre conflictos jurisdiccionales.
- c) Representación del Ayuntamiento ante los Organos Judiciales en procedimientos concursales y otros de ejecución.
- d) Dictar informe preceptivo, en el plazo de cinco días, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Hipotecario.
- f) Informe previo, en el plazo de 15 días, a la resolución de tercerías por parte de la Alcaldía.

Artículo 59 - Otras funciones

- 1.- Cualquier otra función atribuida a órganos del Ministerio de Hacienda distintos de los referenciados anteriormente, corresponderá al Ayuntamiento dentro de la esfera de competencias deducida de su organización interna.
- 2.- En supuestos de dudosa atribución funcional, resolverá el Alcalde a propuesta de la Tesorería.

Artículo 60 - Sistema de recaudación

- 1.- La recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público municipales se realizará en período voluntario a través de las entidades colaboradoras que se reseñarán en el documento-notificación remitido al domicilio del sujeto pasivo.
- 2.- El pago de las deudas en período ejecutivo podrá realizarse en entidad colaboradora durante los plazos de ingreso establecidos en el artículo 108 del R.G.R. Transcurridos estos plazos, el pago de las deudas apremiadas habrá de efectuarse en la Oficina Municipal de Recaudación.
- 3.- A fin de posibilitar el pago en las condiciones referenciadas en los puntos anteriores, se remitirá al sujeto pasivo un documento apto y suficiente para permitir el ingreso en entidades colaboradoras.
Este documento de pago contendrá los requisitos exigidos reglamentariamente para la notificación y cumplirá su función, por lo que será entregado con acuse de recibo siempre que la efectividad de la notificación así lo exija.
- 4.- En el caso de tributos y precios públicos periódicos, la notificación, que podrá ser utilizada como documento de pago, se remitirá por correo ordinario, sin acuse de recibo, dado que no es preceptivo el poder acreditar la recepción por el sujeto pasivo.
- 5.- Si no se recibieran tales documentos, el contribuyente puede acudir a la oficina de Recaudación, donde se expedirá el correspondiente duplicado.
- 6.- Se procurará designar entidades colaboradoras en número suficiente para permitir el pago en una multiplicidad de lugares.

Artículo 61 - Domiciliación bancaria

- 1.- Se pontenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que divulgue sus ventajas.
- 2.- En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del Contribuyente el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda se incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de cargo en cuenta.
- 3.- El cargo en la cuenta de los obligados al pago por parte del Banco o Caja de Ahorros deberá producirse en la última decena del primer mes.
Si la domiciliación no fuera atendida, la entidad bancaria lo comunicará de inmediato, a fin de que por la Unidad de Recaudación se pueda remitir al sujeto pasivo el documento de pago y éste pueda ser recibido antes de la conclusión del período voluntario.

Artículo 62 - Entidades colaboradoras

- 1.- Son colaboradores en la recaudación las Entidades de Depósito autorizadas para ejercer dicha colaboración, concretándose que en el momento de la aprobación de la presente Ordenanza tal condición la ostentan las Cajas de Ahorros establecidas en el Municipio.
- 2.- La autorización de nuevas entidades colaboradoras habrá de ser aprobada por la Comisión de Gobierno, pudiendo recaer dicha autorización en una entidad de depósito y, en supuestos singulares, en otro tipo de entidades, o en agrupaciones de contribuyentes.
- 3.- Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras de la recaudación son las siguientes:
 - a) Recepción y custodia de fondos, entregados por parte de cualquier persona, como medio de pago de los créditos municipales, siempre que se aporte el documento expedido por el Municipio y el pago tenga lugar en las fechas reglamentadas.
 - b) Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas de las que sea titular el Ayuntamiento los fondos procedentes de la recaudación.
 - c) Grabación puntual de los datos que permitan identificar el crédito tributario satisfecho y la fecha de pago, elaborando el correspondiente soporte informático que, decenalmente, será entregado a la Unidad de Contabilidad, junto con el comprobante acreditativo de que ha sido ordenada la transferencia de fondos a la cuenta designada por la Tesorería.

4.- Si existieran otras entidades colaboradoras de la recaudación diferentes de las referidas en el apartado 3, deberán ajustar estrictamente sus actuaciones a las directrices contenidas en el acuerdo de autorización, en el cual necesariamente habrá de contemplarse la exigencia de responsabilidad para el supuesto de incumplimiento de dichas normas.

5.- Las Entidades de Depósito y demás colaboradoras en ningún caso tendrán el carácter de órganos de la recaudación municipal.

SUBSECCION 2ª - GESTION RECAUDATORIA

CAPITULO I - NORMAS COMUNES.

Artículo 63 - Remisión al concepto de ingreso de derecho público

1.- La Administración Municipal, para la realización de los ingresos de Derecho público que deba percibir, ostenta las prerrogativas establecidas en las Leyes Generales Presupuestaria, Tributaria y normativa concordante, al amparo de lo previsto en los artículos 31 y siguientes de la Ley General Presupuestaria.

2.- Siendo así, las facultades y actuaciones del Ayuntamiento alcanzan y se extienden a la gestión de tributos y de otros recursos de Derecho público, pudiendo entenderse aplicables a todas ellas las referencias reglamentarias a la categoría de tributos.

Artículo 64 - Obligados al pago

1.- En primer lugar, están obligados al pago: a) los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos; b) los retenedores y c) los infractores, por las sanciones pecuniarias.

2.- Si los deudores principales, referidos en el punto anterior, no cumplen su obligación, estarán obligados al pago:

- los responsables solidarios
- los adquirentes de explotaciones y actividades económicas.
- Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales.

3.- Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.

4.- Los sucesores " mortis causa " de los obligados al pago de las deudas enumeradas en los puntos anteriores, se subrogarán en la posición del obligado a quien sucedan, respondiendo de las obligaciones tributarias pendientes de sus causantes con las liquidaciones que resulten de la legislación civil para la adquisición de herencia. No obstante, a la muerte del sujeto infractor no se transmiten las sanciones pecuniarias impuestas al mismo.

Artículo 65 - Responsables solidarios

1.- En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes, cuando haya transcurrido el período voluntario de pago sin que el deudor principal haya satisfecho la deuda, se podrá reclamar de los responsables solidarios el pago de la misma.

2.- La responsabilidad solidaria alcanza a todos los componentes de la deuda tributaria, es decir: cuota, recargos de otros Entes, intereses de demora, recargo de apremio, sanciones pecuniarias y costas del procedimiento.

Artículo 66 - Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria

1.- Transcurrido el período voluntario de pago, el Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva preparará el expediente, en base al cual el Tesorero propondrá al Alcalde que dicte el acto de derivación de responsabilidad solidaria.

2.- Desde la Unidad de Recaudación se requerirá al responsable, o a cualquiera de ellos, si son varios, para que efectúe el pago, a la vez que se notifica el acto de derivación, con expresión de:

- Los elementos esenciales de la liquidación y del título ejecutivo.
- Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad.
- Medios de impugnación que pueden ser ejercidos por los responsables, contra la liquidación la extensión de responsabilidad, con indicación de plazos y órganos ante los que habrán de interponerse.
- Lugar, plazo y forma en que deba satisfacerse la deuda, que serán las establecidas para los ingresos en período ejecutivo.

3.- Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable solidario no impedirán otras acciones posteriores contra los demás obligados al pago, mientras no se cobre la deuda por completo.

Artículo 67 - Responsables subsidiarios

1.- En los supuestos previstos en las leyes, los responsables subsidiarios están obligados al pago cuando los deudores principales y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos y se haya dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad.

2.- La responsabilidad subsidiaria, salvo que una norma especial disponga otra cosa, se extiende a la deuda tributaria inicialmente liquidada y notificada al deudor principal en período voluntario.

3.- El acto administrativo de derivación será dictado y notificado por el órgano y en la forma establecida en el artículo 63.

Artículo 68 - Sucesores en las deudas tributarias

1.- Disuelta y liquidada una Sociedad, se exigirá a sus socios o partícipes en el capital, el pago de las deudas pendientes hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

2.- Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda la gestión recaudatoria continuará con sus herederos, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquel y la notificación al sucesor requiriéndole para el pago de la deuda.

3.- En caso de fallecimiento del obligado al pago, si no existen herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia, ó no la hayan aceptado, el Jefe de Unidad de Recaudación Ejecutiva pondrá los hechos en conocimiento del Tesorero, quien dará traslado a la Asesoría Jurídica, a los efectos pertinentes.

Artículo 69 - Domicilio

1.- Salvo que una norma regule expresamente la forma de determinar el domicilio fiscal, a los efectos de gestionar un determinado recurso, a efectos recaudatorios, el domicilio será:

- Para las personas naturales, el de su residencia habitual.
- Para las personas jurídicas, el de su domicilio social.

2.- El contribuyente puede designar otro domicilio propio o de su representante, con el fin de recibir en el mismo las notificaciones administrativas.

3.- En todo caso los sujetos pasivos de los tributos municipales están obligados a declarar en la Tesorería Municipal el domicilio en que desean recibir las notificaciones tributarias, si es distinto del señalado en el apartado 1.-

4.- Asimismo están obligados los sujetos pasivos a declarar las variaciones en su domicilio y también poner de manifiesto las incorrecciones que pudieran observar en las comunicaciones dirigidas desde el Ayuntamiento.

5.- El domicilio declarado por el sujeto pasivo, o rectificado por el Ayuntamiento en base a sus fuentes de información, se incorporará como elemento de gestión asociado a cada contribuyente y constituirá la dirección a la que remitir todas las notificaciones derivadas de la gestión recaudatoria.

6.- Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español.

Artículo 70 - Legitimación para efectuar y recibir el pago

1.- El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por terceras personas con plenos efectos extintivos de la deuda.

2.- El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar de la Administración la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran corresponderle.

3.- El pago de la deuda habrá de realizarse en la Oficina de Recaudación, o en las entidades designadas como colaboradoras, cuya relación consta en los documentos - notificación remitidos al contribuyente.

Artículo 71 - Deber de colaboración con la administración

1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar a la Administración Municipal los datos y antecedentes necesarios para la cobranza de las cantidades que como ingresos de Derecho público aquella deba percibir, según lo que autorizan los artículos 31 y siguientes de la Ley General Presupuestaria.

2.- En particular las personas o Entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores y otros bienes de deudores a la Administración Municipal en período ejecutivo, están obligados a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos que, en ejercicio de las funciones legales, se efectúen y que serán suscritas por el Tesorero Municipal.

3.- El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración, a que se refiere este artículo, podrá originar la imposición de sanciones, según lo establecido en la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria y normas sobre procedimiento sancionador.

CAPITULO II - PARTICULARIDADES DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA

Artículo 72 - Períodos de recaudación

1.- El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, tanto por tributos como por precios públicos serán los determinados por el Ayuntamiento, en los términos recogidos en los artículos 10 y 29. En ningún caso el plazo para pagar estos créditos será inferior a dos meses naturales.

2.- El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas por liquidaciones de ingreso directo será el que conste en el documento-notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que pueda ser inferior al período establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación y que es el siguiente:

a) Para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Para las deudas notificadas entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

3.- Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos anteriores, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de plazos, se aplicará lo dispuesto en este artículo.

4.- Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán en vía de apremio, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades pagadas fuera de plazo.

5.- Para que la deuda en período voluntario quede extinguida, debe ser pagada en su totalidad.

Artículo 73 - Desarrollo del cobro en período voluntario

1.- Salvo que una norma regule expresamente la forma de determinar el domicilio fiscal, a los efectos de gestionar un determinado recurso.

2.- Los medios de pago admisibles son el dinero de curso legal y el cheque, que habrá de ser nominativo a favor del Ayuntamiento.

3.- El deudor de varias deudas podrá al realizar el pago en período voluntario imputarlo a las que libremente determine.

4.- En todo caso a quien ha pagado una deuda se le entregará un justificante del pago realizado que habrá de estar autenticado mecánicamente, a efectos de facilitar el control de los fondos recaudados.

5.- Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas de las que sea titular el Ayuntamiento los fondos procedentes de la recaudación.

Decenalmente remitirán a la Tesorería cinta magnética conteniendo los datos identificativos de las deudas y los deudores.

A esta cinta se adjuntarán el documento-resumen de valores e importe recaudados, así como el comprobante acreditativo de la transferencia de fondos a la cuenta del Ayuntamiento.

Artículo 74 - Conclusión del período voluntario

1.- Concluido el período voluntario de cobro, tras la recepción y tratamiento de cintas informáticas conteniendo datos de la recaudación de aquellos conceptos cuya cobranza ha finalizado, se expedirán por el Departamento de Informática las relaciones de recibos y liquidaciones que no han sido satisfechos en período voluntario.

2.- En la misma relación se hará constar las incidencias de suspensión, aplazamiento, fraccionamiento de pago, o anulación.

La relación de deudas no satisfechas y que no estén afectadas por alguna de las situaciones del punto 2 servirá de fundamento para la expedición de la certificación de descubierto colectiva.

CAPITULO III - PARTICULARIDADES RECAUDACION EJECUTIVA**Artículo 75 - Inicio procedimiento de apremio**

1.- El período ejecutivo y el procedimiento administrativo de apremio se inician para las liquidaciones, previamente notificadas no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.

2.- El procedimiento tendrá carácter exclusivamente administrativo y se sustanciará en el modo regulado en el Libro III del Reglamento General de Recaudación, constituyendo los artículos siguientes manifestación de muy singulares puntos en que puede incidir la capacidad autorganizativa del Ayuntamiento.

Artículo 76 - Plazos de ingreso

1.- Las deudas apremiadas se pagarán en los siguientes plazos:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguientes o inmediato hábil posterior.

2.- Cuando las deudas se paguen en estos plazos, no se liquidará interés de demora.

3.- Una vez transcurridos los plazos del punto 1 si existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y en el supuesto de realizarse un pago que no cubra la totalidad de aquellas, se aplicará a las deudas más antiguas, determinándose la antigüedad en función de la fecha de vencimiento del período voluntario.

Artículo 77 - Providencia de apremio

1.- La providencia de apremio, dictada por el Tesorero Municipal, despacha la ejecución contra el patrimonio del deudor, en virtud de las certificaciones de descubierto expedidas por la Intervención.

2.- La providencia de apremio podrá ser impugnada mediante el correspondiente recurso de reposición ante el Tesorero, por los siguiente motivos:

- Prescripción.
- Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria.
- Pago o aplazamiento en período voluntario
- Defecto formal en el título ejecutivo.

3.- Cuando la impugnación se refiera a la existencia de causa de nulidad en la liquidación, se ordenará la paralización de actuaciones. Si se verifica que efectivamente se da aquella causa, se instará el correspondiente acuerdo administrativo de anulación de la liquidación y se estimará el recurso contra la providencia de apremio.

Artículo 78 - Recursos contra actos del personal

Cuando el acto proceda del personal recaudador, puede interponerse recurso de reposición ante el Alcalde, acompañando al escrito la prueba documental pertinente.

En todos estos supuestos, el recurso correspondiente deberá de interponerse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

Contra la denegación de este recurso los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses si la resolución fuera expresa y de un año si fuera tácita, a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición.

Artículo 79 - Mesa de subasta

La mesa de subasta de bienes estará integrada por el Tesorero, que será el Presidente, por el Jefe de la Unidad de Recaudación, por el Inteventor y por el funcionario o empleado que designe a tal efecto y para este acto el Alcalde. Todos ellos podrán nombrar sustitutos.

Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y, optativamente, cuando la naturaleza y valoración del bien lo aconsejen, se insertarán en medios de comunicación de gran difusión y en publicaciones especializadas.

Artículo 80 - Celebración de subastas

1.- En las subastas de bienes, el tiempo para constituir depósitos ante la mesa, será, en primera licitación de media hora.

2.- El importe de los tramos de licitación, deberán adecuarse a las siguientes escalas:

a) Para tipos de subasta inferiores a pts. 1.000.000.-, diez mil pesetas.

b) Para tipos de subasta desde pts. 1.000.001.- hasta pts. 5.000.000.- veinte mil pesetas.

c) Para tipos de subasta superiores a pts. 5.000.001.- cincuenta mil pesetas.

3.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta, hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en un libro, que a tal efecto, se llevará en la oficina recaudatoria que tramita este expediente. Estas ofertas deberán de ir acompañadas de cheque conformado extendido a favor del Ayuntamiento por el importe del depósito y que no tendrá validez si su conformidad no se extiende hasta diez días más tarde a la fecha de celebración de subasta.

4.- Los cheques serán ingresados en la cuenta que designe el Tesorero, procediéndose a la devolución de los importes depositados a los licitadores no adjudicatarios una vez concluida la subasta. La materialización de tal devolución se efectuará mediante cheque extendido por el Tesorero.

5.- En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta, algún licitador que hubiera presentado su oferta en sobre cerrado, manifieste por escrito la voluntad de no concurrir a la licitación, se procederá a la devolución del depósito en las condiciones establecidas en el punto 4.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, empezará la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas, y será adjudicataria la postura más alta por el tramo superior a la segunda en el caso de no existir otras ofertas.

7.- Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobre cerrado, pujarán por ellos, según el tramo establecido en el presente Reglamento, sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta.

8.- En el supuesto de venta por adjudicación directa, la enajenación se ha de llevar a cabo dentro del plazo de un mes a contar desde el momento de celebración de la subasta.

Artículo 81 - Intereses de demora

1.- Las cantidades debidas acreditarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.

2.- La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.

3.- El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 58.2 b) de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.

4.- La liquidación de los intereses de demora se realiza en el momento del pago de la deuda de apremio y, con carácter general, se cobrarán junto con el principal.

5.- Si el deudor se negara a satisfacer los intereses de demora en el momento de pagar el principal, se practicará liquidación que deberá ser notificada y en la que se indiquen los plazos de pago.

6.- Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento, una deuda se satisfaga antes de que transcurran los plazos de ingreso de las deudas apremiadas establecidos por el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, no se exigirán intereses de demora.

7.- En el caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido en la cancelación de la deuda, si aquella fuera superior.

8.- Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse y retenerse los intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuera superior a la deuda perseguida.

9.- En los dos casos anteriores, si el líquido obtenido fuera inferior, se practicará posteriormente liquidación de los intereses devengados.

10.- No se practicarán las liquidaciones resultantes de los puntos 5 y 9 cuando su importe sea inferior a 500 pts.

CAPITULO IV - APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTO**Artículo 82 - Solicitud**

1.- La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirá al Tesorero, a quien corresponde la apreciación de la situación de tesorería del obligado al pago en relación a la posibilidad de satisfacer los débitos.

2.- La Tesorería dispondrá lo necesario para que las solicitudes referidas en el punto anterior se formulen en documento específico, en el que se indiquen los criterios municipales de concesión y denegación de aplazamientos, así como la necesidad de fundamentar las dificultades de tesorería, aportando los documentos que se crean convenientes.

3.- Será preciso detallar la garantía que se ofrece o, en su caso, la imposibilidad de constituir afianzamiento.

4.- Las peticiones de aplazamiento se presentarán dentro de los plazos siguientes :

- a) Deudas que se encuentran en período voluntario, durante el plazo de éste.
- b) Deudas en ejecutiva, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

Artículo 83 - Criterios de concesión y denegación de aplazamientos

1.- Sólo excepcionalmente se aplazarán el pago de las deudas cuyo importe sea inferior a 25.000 pesetas.

2.- Las deudas de importe inferior a 250.000 pesetas podrán aplazarse por un período máximo de tres meses.

3.- El pago de las deudas de importe comprendido entre 250.000 y 1.000.000 de pesetas puede ser aplazado o fraccionado hasta un año.

4.- Si el importe excede de 1.000.000 de pesetas, los plazos concedidos pueden extenderse hasta 18 meses

5.- En todo caso, la concesión de aplazamiento o fraccionamiento requerirá informe favorable de la Tesorería que sólo podrá fundamentarse en la valoración de la imposibilidad de atender al pago de las deudas.

Artículo 84 - Intereses de demora

1.- Las cantidades cuyo pago se aplaze, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán intereses de demora por el tiempo que dure el aplazamiento y al tipo de interés de demora o tipo de interés legal fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y según se trate de deudas tributarias o no tributarias.

2.- En la aplicación del punto 1, se tendrán en cuenta estas reglas :

- a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario y hasta el plazo concedido.
- b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.

Artículo 85 - Efectos de la falta de pago

1.- En los aplazamientos la falta de pago a su vencimiento de las cantidades aplazadas determinará :

- a) Si la deuda se hallaba en período voluntario en el momento de conceder el aplazamiento, su inmediata exigibilidad en período ejecutivo.
- b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, la continuación del procedimiento de apremio.

2.- En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo determinará :

- a) Si la deuda se hallaba en período voluntario, la exigibilidad en vía de apremio de las cantidades vencidas, extremo que será notificado al sujeto pasivo, concediéndole los plazos reglamentarios de pago de las deudas en período ejecutivo. (Art. 108 R.G.R.)
Si se incumpliera la obligación de pagar en este término, se considerarán vencidos los restantes plazos, exigiéndose también en vía de apremio.
- b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, continuará el procedimiento de apremio para ejecución de la deuda impagada.

Artículo 86 - Aplazamiento de deudas no tributarias

1.- Las cantidades adeudadas a la Hacienda Municipal por conceptos no tributarios podrán fraccionarse o aplazarse de acuerdo con las reglas generales contenidas en el Capítulo 4º de la Sección 3ª de esta Ordenanza.

Artículo 87 - Garantías

1.- Se aceptarán en todo caso las siguientes garantías :

- a) Aval solidario de entidades de depósito que cubra el importe del principal y de los intereses de demora más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. El término de este aval deberá exceder en 6 meses, al menos, al vencimiento de los plazos concedidos.
- b) Certificaciones de obra aprobadas por el Ayuntamiento, cuyo pago quedará retenido en tanto no cancele la deuda afianzada.

2.- En las deudas de importe inferior a 250.000 pesetas, además de las garantías del apartado 1, se podrá admitir la fianza personal y solidaria de un vecino del Municipio.

3.- En supuestos de verdadera necesidad se podrá dispensar de aportar garantía, correspondiendo adoptar el correspondiente acuerdo :
- En deudas de importe inferior a 250.000 pesetas al órgano que concede el aplazamiento.
- En deudas de importe superior a 250.000 pesetas a la Comisión de Gobierno.

4.- Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente, a juicio del Tesorero, se considerará garantizada la deuda y no será necesario aportar nueva garantía.

Artículo 88 - Organos competentes para su concesión

1.- La concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago es competencia del Alcalde, que podrá delegar en los siguientes supuestos y órganos :

- Deudas de importe inferior a 250.000 pesetas en período voluntario - Concejal de Hacienda, en período ejecutivo - Tesorero Municipal.

2.- El acuerdo de concesión especificará la clase de garantía que el solicitante deberá aportar o, en su caso, la dispensa de esta obligación.

Artículo 89 - Recursos

1.- La resolución de las peticiones sobre aplazamientos será notificada, por el órgano competente para concederlos, a los interesados.

Contra la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento de pago, podrá interponerse recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.

Contra la denegación de este recurso podrá interponerse directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, si la resolución fuera expresa, y en el de un año si fuera tácita, contado desde el día de la fecha de interposición del recurso de reposición.

Artículo 90 - Suspensiones del procedimiento

1.- El procedimiento recaudatorio se impulsa de oficio y no se suspenderá sin acuerdo administrativo o judicial que ordene la suspensión

2.- Cuando la suspensión afecta a deudas en período voluntario, si de la resolución del recurso no resulta la anulación de la liquidación, la deuda deberá pagarse en el plazo voluntario que restaba en el momento de la suspensión, o en el de quince días si aquel fuera inferior.

3.- En los casos de interposición de recurso, en que se solicita por el interesado la suspensión del procedimiento de apremio, con carácter general, será requisito imprescindible la concesión de la suspensión que se acompañe garantía que cubra el total de la deuda y costas del procedimiento.

4.- No obstante, cuando el deudor demuestre ante la Unidad de Recaudación la extinción de la deuda, o la existencia de error en la determinación de la deuda, se paralizarán las actuaciones recaudatorias, sin necesidad de garantía y poniéndolo en conocimiento del Tesorero.

Verificadas las pruebas aportadas por el deudor, el Tesorero ordenará la anulación de actuaciones y, en su caso, práctica de nueva liquidación, o bien la continuación del procedimiento.

ARTICULO 91 - Supuestos particulares de suspensión

1.- En los casos de solicitud de aplazamiento en vía ejecutiva, podrá suspenderse el procedimiento hasta que por el órgano competente para su resolución se dicte el acuerdo correspondiente, sin que pueda exceder de un mes el período de suspensión.

2.- Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los bienes o los derechos controvertidos, la interposición de tercería de dominio. Esta suspensión será acordada por el Tesorero, una vez se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan según lo dispuesto en el artículo 173 del R.G.R. y, vistos los documentos originales en que el tercerista funda su derecho.

3.- En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y procedimientos de ejecución o concursales universales, judiciales y no judiciales, el Tesorero solicitará de los órganos judiciales información sobre estos procedimientos que pueda afectar a los derechos de la Hacienda Municipal, acordando al mismo tiempo la suspensión del procedimiento.

4.- Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo anterior se dará cuenta a la Asesoría Jurídica acompañando cuanta documentación sea necesaria y en concreto certificación de las deudas al efecto de que por parte de esta Asesoría se asuma la defensa de los derechos de la Hacienda Municipal.

5.- La competencia por suscripción de acuerdos o convenios que resultasen de la tramitación del procedimiento anterior, corresponderá al Alcalde.

CAPITULO V - PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACION

Artículo 92 - Prescripción

1.- El plazo para exigir el pago de las deudas tributarias prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de finalización del plazo de pago voluntario.

2.- El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se determinará en base a la normativa particular que regule la gestión de las mismas.

3.- La prescripción se aplicará de oficio y será declarada por el Tesorero, que anualmente instruirá expediente colectivo referido a todas aquellas deudas prescritas en el año. Este expediente, fiscalizado por el Interventor, se someterá a aprobación de la Comisión de Gobierno.

Artículo 93 - Interrupción de la prescripción

1.- El plazo de prescripción se interrumpirá:

a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la deuda, o a la interposición de reclamación o recurso.

b) Por cualquier actuación de los órganos de recaudación, encaminada a la realización o aseguramiento de la deuda. Estas actuaciones deberán documentarse en la forma exigida reglamentariamente, haciéndose constar en particular que las notificaciones practicadas en la forma regulada en los arts. 15 y 16 de esta Ordenanza tienen valor interruptivo de la prescripción.

2.- Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de la Administración.

Interrumpido el plazo de prescripción, la interrupción afecta a todos los obligados al pago.

3.- La interrupción ganada extingue la deuda.

Artículo 94 - Compensación

1.- Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con las obligaciones reconocidas por parte de aquel y a favor del deudor.

2.- Cuando la compensación afecta a deudas en período voluntario, será necesario que la solicite el deudor.

3.- Cuando las deudas se hallan en período ejecutivo, el Alcalde puede ordenar la compensación, que se practicará de oficio y será notificada al deudor.

Artículo 95 - Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas

1.- Las deudas a favor del Ayuntamiento, cuando el deudor sea un Ente territorial, Organismo Autónomo, Seguridad Social o Entidad de derecho público, cuya actividad no se rija por el ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario.

2.- El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente.

a) Comprobada por la Unidad de Recaudación la existencia de una deuda con el Ayuntamiento de las Entidades citadas en el punto 1, lo pondrá en conocimiento de la Tesorería.

b) Si el Tesorero conoce de la existencia de créditos a favor de las Entidades deudoras, dará traslado de sus actuaciones a la Asesoría Jurídica, a fin de que pueda ser redactada la propuesta de compensación.

c) Adoptado el acuerdo que autorice la compensación, por parte del Alcalde, se comunicará a la Entidad deudora, procediendo a la formalización de aquella cuando hayan transcurrido quince días sin reclamación del deudor.

Artículo 96 - Cobro de deudas de Entidades Públicas

1.- Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extinción de las deudas de las Entidades Públicas reseñadas en el artículo anterior, por no ostentar las mismas crédito alguno contra el Ayuntamiento, el Tesorero trasladará a la Asesoría Jurídica el conjunto de sus actuaciones investigadoras.

2.- La Asesoría Jurídica, después de examinar la naturaleza de la deuda, del deudor y el desarrollo de la tramitación del expediente, elaborará propuesta de actuación, que puede ser una de las siguientes:

- Proseguir las actuaciones hasta llegar al embargo de bienes patrimoniales que pertenezcan al deudor.

- Solicitar la colaboración de la Dirección General de Recaudación.

- Solicitar de la Administración del Estado el pago de la deuda, con cargo a las transferencias de fondos que hubieran de ordenarse a favor del deudor.

3.- Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas por el Alcalde y de su resolución se efectuará notificación formal a la Entidad deudora.

4.- En los títulos acreditativos de deudas a favor del Ayuntamiento del Estado, Comunidades Autónomas, Organismos Autónomos y otras Entidades Públicas, no se consignará el importe del recargo, ni la providencia de apremio.

CAPITULO VI - CREDITOS INCOBRABLES

Artículo 97. Situación de insolvencia.

1.- Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el plazo de prescripción.

2.- La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo.

3.- Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados o responsables.

Artículo 98. Medios de justificación de actuaciones.

1.- El Jefe de Unidad de Recaudación documentará debidamente los expedientes, formulando propuesta que, con la conformidad del Tesorero, se someterá a fiscalización de la Intervención y aprobación de la Comisión de Gobierno.

2.- En base a los criterios de economía y eficacia en la gestión recaudatoria, se detalla a continuación la documentación a incorporar en los expedientes para la declaración de crédito incobrable, en función de la cuantía de los mismos.

Artículo 99. Créditos incobrables.

1.- Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago.

2.- El calificativo de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.

3.- La Unidad de Recaudación Ejecutiva, bajo la dirección del Tesorero, deberá, directamente o a través de otros órganos municipales, realizar aquellas actividades de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos y que conduzcan a la realización de los créditos de Derecho público.

4.- Informáticamente, y en un registro asociado con el N.I.F. del sujeto pasivo, se controlará la declaración de créditos incobrables liquidados al mismo.

Artículo 100 - Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de declaración de créditos incobrables con antigüedad superior a dos años

1) Deudas acumuladas hasta 31-XII-89 de importe inferior a 5.000 pts., sin que el deudor lo sea por otros conceptos liquidados con posterioridad a 1-1-90

Se formulará propuesta cuando:

a) Intentada la notificación en todos los domicilios que figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes resulte el deudor DESCONOCIDO.

b) Intentada la notificación en los domicilios señalados en el apartado a) en distintas ocasiones resulte AUSENTE, siempre que se carezca de N.I.F.

c) Disponiendo de N.I.F. del deudor se ha intentado la notificación en la forma y con el resultado señalados en el apartado b) y también se ha intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con resultado NEGATIVO.

2) Deudas acumuladas hasta 31-XII-89 de importe inferior a 5.000,- pts., correspondientes a un deudor que debe otros conceptos liquidados después de 1-1-90.

Dado que la notificación de deudas y de actuaciones se referirá tanto a los valores liquidados antes de 31-XII-89 como a los posteriores, el Tesorero valorará la conveniencia de extender la propuesta a los valores liquidados después de 1-1-90.

3) Deudas acumuladas hasta 31-XII-89, de importe comprendido entre 5.001,- pts. y 10.000,- pts., sin que el deudor lo sea por otros conceptos liquidados con posterioridad a 1-1-90.

Se formulará propuesta en estos supuestos:

a) - Se ha intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 1.a) con el resultado de desconocido o ausente en varios repartos.

- Se ha publicado en el B.O.P.

- No se dispone de N.I.F.

- No se ha satisfecho la deuda ni se ha conocido ningún nuevo elemento.

b) - Se ha intentado la notificación por los medios y con el resultado señalados en el apartado a) anterior.

- Disponiendo de N.I.F. del deudor, se ha intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con resultado negativo.

c) - Se ha practicado notificación válida.

- El embargo de fondos en distintas entidades es negativo.

- El embargo de salarios no es posible.

4) Deudas acumuladas hasta 31-XII-89 de importe comprendido entre 5.001,- pts. y 10.000,- pts., correspondientes a un deudor que debe otros conceptos liquidados después de 1-1-90.

Es de aplicación lo señalado en el punto 2, debiéndose considerar que en el supuesto de poseer N.I.F. será preciso investigar también la existencia de bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del sujeto pasivo.

En función del resultado de esta última gestión y según las características de la deuda posterior a 1-1-90, el Tesoro valorará el alcance de la propuesta.

5) Deudas acumuladas hasta 31-XII-89, de importe comprendido entre 10.001,- pts. y 50.000,- pts., sin que el deudor lo sea por otros conceptos liquidados con posterioridad a 1-1-90

Se formulará propuesta cuando:

a) - Se ha intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 1.a) con el resultado de desconocido o ausente en varios repartos.

- Se ha publicado en el B.O.P.

- No se dispone de N.I.F.

- No se ha satisfecho la deuda ni se ha conocido ningún nuevo elemento.

- No figura como sujeto pasivo en el padrón del I.B.I. o del I.A.E.

b) - Se ha intentado la notificación por los medios y con el resultado señalados en el apartado a) anterior.

- Disponiendo de N.I.F. del deudor, se ha intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con resultado negativo.

- Se ha intentado el embargo de salarios con resultado negativo.

c) - Se ha practicado notificación válida.

- El embargo de fondos en distintas entidades es negativo.

- El embargo de salarios no es posible.

- No existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.

d) - Se ha practicado notificación válida.

- El embargo de fondos en distintas entidades es negativo.

- El embargo de salarios no es posible.

- Existiendo bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor, el Ayuntamiento se opone al embargo del inmueble por considerar desproporcionada esta actuación en relación al importe de la deuda.

6) Deudas acumuladas hasta 31-XII-89, de importe comprendido entre 10.001,- pts. y 50.000,- pts., correspondientes a un deudor que debe otros conceptos liquidados después de 1-1-90

El tesoro se valorará el alcance de la propuesta en cuanto su extensión a conceptos liquidados después de 1-1-90.

7) Deudas acumuladas hasta 31-12-89 superiores a 50.000,- pts.

Se formulará propuesta cuando:

- a) - Se ha intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 1.a) con el resultado de desconocido o ausente en varios repartos.
 - Se ha publicado en el B.O.P.
 - No se dispone de N.I.F.
 - No se ha satisfecho la deuda ni se ha conocido ningún nuevo elemento.
 - No figura como sujeto pasivo en el padrón del I.B.I. o del I.A.F.
- b) - Se ha intentado la notificación por los medios y con el resultado señalados en el apartado a) anterior.
 - Disponiendo de N.I.F. del deudor, se ha intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con resultado negativo.
 - Se ha intentado el embargo de salarios con resultado negativo.
- c) - Se ha practicado notificación válida.
 - El embargo de fondos en distintas entidades es negativo.
 - El embargo de salarios no es posible.
 - No existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.
 - Se ha investigado en el Registro Mercantil con resultado negativo.

Artículo 101 - Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de otros créditos incobrables

1.- A efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre importe de la deuda y medios utilizados para su realización, con carácter general y siempre que se cuente con N.I.F. del deudor y se haya practicado válidamente la notificación, si fuere preciso para la realización del crédito se realizarán las siguientes:

- a) Deudas hasta 5.000,- pts.:
 - embargo de fondos en cuentas corrientes.
- b) Deudas entre 5.001,- pts. y 50.000,- pts.:
 - embargo de fondos en cuentas corrientes.
 - embargo de salarios.
- c) Deudas de más de 50.000,- pts.:
 - embargo de fondos
 - embargo de salarios
 - embargo de bienes inmuebles.

2.- Cuando el resultado de dichas actuaciones sea negativo, se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable.

Artículo 102 - Efectos

- 1.- La declaración de crédito incobrables motivará la baja en cuentas del Crédito.
- 2.- Dicha declaración no impide el ejercicio de las acciones contra quien proceda, en tanto no se extinga la acción administrativa para su cobro.
- 3.- La Dependencia de Recaudación Ejecutiva vigilará la posible solvencia sobrevenida a los obligados y responsables declarados fallidos.

Con esta finalidad, el Tesorero instrumentará los circuitos administrativos para disponer y concur puntualmente la información municipal relevante.

SECCION IV INSPECCION

Artículo 103 - La Inspección de los Tributos.

Constituyen la Inspección de los Tributos los Organos de la Administración de la Hacienda Pública Local que tienen encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública Local, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.

La Inspección de los Tributos podrá tener atribuidas otras funciones de gestión tributaria. Asimismo, los Organos con funciones en materia de gestión podrán efectuar la comprobación formal de los datos consignados en las declaraciones tributarias presentadas.

Artículo 104 - Funciones de la Inspección de los Tributos.

Corresponde a la Inspección de los Tributos:

- a) La investigación de los hechos imposables para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración y su consiguiente atribución al sujeto pasivo u obligado tributario.
- b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes de determinación o estimación y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas, estableciendo, en su caso, el importe de las deudas tributarias correspondientes.
- c) Practicar, en su caso, las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
- d) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás Organos de la Administración Tributaria Local, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros Organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos locales.
- e) La comprobación del valor de los bienes, de los actos o negocios y de los demás elementos del hecho imponible.
- f) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas fiscales y sobre el alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se deriven.
- g) En relación a la inspección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la Inspección Tributaria Local realizará cuantas actuaciones resulten del régimen de colaboración establecido en el Convenio suscrito con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (C.G.C.C.T.).

En tanto no se formalice tal Convenio, desde la Inspección Tributaria Local se coordinará la recepción de información relativa a omisiones de tributación y su posterior traslado al C.G.C.C.T., así como la correspondiente regularización en el padrón del impuesto.

h) En relación a la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, la Inspección Tributaria Local llevará a cabo todas las actuaciones dimanantes del régimen de delegación o colaboración autorizado por la Administración Estatal, procurando con especial interés la correcta inclusión en el censo de aquellos sujetos pasivos que, debiendo figurar en el mismo, no consten en él.

i). Cualesquiera otras funciones que se le encomienden por los Organos competentes de la Administración Local.

Artículo 105 - Fuentes.

1.- Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección Tributaria Municipal se registrarán:

- a). Por la Ley General Tributaria, en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario.
- b). Por la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
- c). Por las Leyes reguladoras de los distintos tributos locales.
- d). Por el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y los propios de los distintos tributos locales.
- e). Por las disposiciones dictadas por la correspondiente Comunidad Autónoma o por las Haciendas Territoriales respectivas en el ámbito de sus competencias.
- f). Por la presente Ordenanza General y las propias de los distintos tributos locales.
- g). Por cuantas otras disposiciones integren el Ordenamiento jurídico vigente y resulten de aplicación.

2.- En todo caso, tendrán carácter supletorio la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto no sea directamente aplicable, y las demás disposiciones generales de Derecho Administrativo.

Artículo 106 - Personal inspector.

1.- Las actuaciones derivadas de las funciones señaladas en el artículo 105 de esta Ordenanza se realizarán por los funcionarios que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo en la Inspección Tributaria Local, bajo la inmediata supervisión de quien ostente su Jefatura, quien dirigirá, impulsará y coordinará el funcionamiento de la misma, con la preceptiva autorización de la Alcaldía-Presidencia.

2.- No obstante, actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse a otros empleados públicos que no ostenten la condición de funcionarios.

3.- Los funcionarios de la Inspección Tributaria Local, en el ejercicio de las funciones inspectoras, serán considerados Agentes de la autoridad, a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo.

4.- Las Autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general ejerzan funciones públicas, deberán prestar a los funcionarios y demás personal de la Inspección Tributaria Local, a su petición, el apoyo, concurso, auxilio y protección que les sean precisos.

5.- La Alcaldía-Presidencia proveerá al personal inspector de un carnet u otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo.

6.- Los empleados públicos adscritos a la Inspección Tributaria Local deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, actuando con la más exquisita cortesía y consideración respecto a los interesados y al público en general.

Artículo 107 - Clases de actuaciones.

- 1.- Las actuaciones inspectoras podrán ser:
 - a). De comprobación e investigación.
 - b). De obtención de información con trascendencia tributaria.
 - c). De valoración.
 - d). De informe y asesoramiento.
- 2.- El alcance y contenido de estas actuaciones es el definido para las mismas en la Ley General Tributaria, el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y demás disposiciones que sean de aplicación, todo ello referido, exclusivamente, a los tributos municipales.

3.- El ejercicio de las funciones propias de la Inspección Tributaria Local se adecuará a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, aprobadas por la Alcaldía-Presidencia, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad.

4.- En los supuestos de actuaciones de colaboración con otras Administraciones Tributarias, la Inspección Tributaria Local coordinará con ellas sus planes y programas de actuación, teniendo sus actuaciones el alcance previsto en la reglamentación del régimen de colaboración de que se trate.

5.- La Inspección Tributaria Local podrá llevar a cabo actuaciones de valoración a instancia de otros Organos responsables de la gestión tributaria o recaudatoria.

Artículo 108 - Lugar y tiempo de las actuaciones.

- 1.- Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse indistintamente:
 - a). En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiere designado.
 - b). En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.
 - c). Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.
 - d). En las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 145 de la Ley General Tributaria cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.

2.- La Inspección determinará en cada caso el lugar donde hayan de desarrollarse sus actuaciones, haciéndolo constar en comunicación correspondiente.

3.- El tiempo de las actuaciones se determinará por lo dispuesto al respecto en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

Artículo 109 - Los obligados tributarios en el procedimiento de Inspección y su representación:

1.- Son obligados tributarios los que como tales están definidos en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y en las demás normas aplicables al efecto. Los deberes a que están obligados y los derechos que les asisten son los establecidos en la normativa antes citada.

2.- Los obligados tributarios podrán actuar por medio de representante, que deberá acreditar tal condición, entendiéndose en tal caso realizadas las actuaciones correspondientes con el sujeto pasivo u obligado tributario.

Artículo 110 - Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras.

1.- Las actuaciones de la Inspección podrán iniciarse:
a). Por propia iniciativa de la misma, atendándose al plan previsto al efecto.

- b). En virtud de denuncia pública.
- c). A petición del obligado tributario.

2.- En los casos previstos en las letras b) y c) anteriores la Jefatura de Inspección ponderará y valorará la conveniencia de la realización de la misma.

3.- Las actuaciones de la Inspección se podrán iniciar mediante comunicación notificada o personándose sin previa notificación, y se desarrollarán con el alcance, facultades y efectos que establece el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

4.- El personal inspector podrá entrar en las fincas, locales de negocio y demás lugares en que se desarrollen actividades, sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación o se produzcan hechos impositivos, cuando se considere preciso en orden a la práctica de la actuación inspectora.

5.- Las actuaciones inspectoras deberán proseguir hasta su terminación, pudiendo interrumpirse por moción razonada de los actuarios, que se comunicará al obligado tributario para su conocimiento.

Artículo 111 - Documentación de las actuaciones inspectoras.

Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas. Estos documentos tendrán las funciones, finalidades y efectos que para ellos establece el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, tramitándose conforme a lo establecido en el mismo, entendiéndose, a estos efectos, que las referencias que figuran al Inspector-Jefe lo son en este caso a quien ostente la Jefatura de la Inspección.

Artículo 112 - Infracciones simples.

1.- Los casos tipificados en la normativa aplicable como infracciones tributarias simples serán sancionadas por cada uno de los hechos u omisiones con las cuantías que a continuación se detallan:

a). Por no atender en cualquiera de sus extremos los requerimientos efectuados:

- Primer requerimiento no atendido: 25.000 pesetas.
- Segundo requerimiento no atendido: 50.000 pesetas.
- Tercero y sucesivos requerimientos no atendidos: 100.000 pesetas.

b). Se considerará de especial trascendencia para la gestión de los tributos locales la falta de presentación de declaraciones tributarias establecidas en la normativa reguladora de los distintos tributos, sancionándose con multa de 50.000 pesetas la falta de presentación de cada declaración.

Todo ello sin perjuicio de que, por aplicación de lo establecido en el artículo 83.6 y de los criterios de graduación previstos en el artículo 82, ambos de la Ley General Tributaria, y normas concordantes, puedan proceder sanciones de importe superior.

2.- Las infracciones simples no contempladas en este artículo se sancionarán, con carácter general, en su grado mínimo.

3.- Las sanciones por infracción simple requerirán expediente distinto e independiente del instruido, en su caso, para regularizar la situación fiscal del obligado tributario, acordándose la imposición de las mismas por la Alcaldía-Presidencia, previo informe motivado del actuario correspondiente.

Artículo 113 - Infracciones graves.

Las infracciones tipificadas como graves serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, en la normativa propia de cada tributo, en los Reglamentos Generales dictados en desarrollo de la misma y de los mismos, respectivamente, y, en su caso, en las Ordenanzas de cada tributo.

Concretamente, el criterio de graduación de sanciones por perjuicio económico se aplicará tal y como lo regula el artículo 13.1 a) del Real Decreto 2631/1985, de 18 de Diciembre, sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias (B.O.E. 18-01-1986), siendo también de aplicación, los demás criterios de graduación de sanciones previstos en dicha disposición.

DISPOSICION ADICIONAL

En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en la Ley General Tributaria y resto de las Leyes del Estado reguladoras de la materia.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 16 de Noviembre de 1992, y entrará en vigor a partir del 1 de Enero de 1993, hasta su modificación o derogación.

Reocfn, a 16 de Noviembre de 1992

El Alcalde,



[Handwritten signature]

93/13113

AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS

EDICTO

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de treinta días hábiles, se halla expuesto al público el expediente de modificación de las siguientes ordenanzas de exacciones municipales, que fueron aprobadas provisional e inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 5 de febrero de 1993:

—Número 6: Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras.

—Número 10: Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado.

—Número 8: Ordenanza reguladora del precio público por suministro de agua.

En el mismo plazo y de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 17.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Limpías, 8 de febrero de 1993.—El alcalde, José Román Sainz Pereda.

93/13087

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

ANUNCIO

En aplicación de la cláusula de revisión automática de tarifas contenida en la ordenanza fiscal reguladora del servicio de alcantarillado, por la que se deberá de incrementar dicha tarifa en un porcentaje igual al experimentado por los índices de precio al consumo y de acuerdo con la certificación expedida por el Instituto Nacional de Estadística, señalando que el incremento en el año 1992 ha sido de un 5,4%, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de febrero de 1993, aprueba las siguientes tarifas que entran en vigor en el presente ejercicio de 1993:

1. *Servicio de alcantarillado.*

A) *Uso doméstico:*

a) Mínimo trimestral fijo hasta 30 metros cúbicos de agua consumida o contratada como mínimo para consumo, de 476 pesetas/trimestre.

b) Por cada metro cúbico de exceso facturado como agua en cada trimestre, 16 pesetas.

B) *Usos no domésticos o industriales.*

a) Mínimo trimestral fijo, hasta 30 metros cúbicos de agua consumida o contratada como mínimo para consumo, 948 pesetas/trimestre.

b) Por cada metro cúbico de exceso facturado como agua en cada trimestre, 32 pesetas.

C) Otros conceptos.

Tarifas de enganche a la red de alcantarillado:

a) Viviendas unifamiliares o bifamiliares. Por cada vivienda, 30.039 pesetas.

b) Pisos y apartamentos en edificaciones colectivas. Por cada vivienda, 42.160 pesetas.

Arnuero a 2 de febrero de 1993.—El alcalde (ilegible).

93/11948

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

ANUNCIO

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 1993, se aprobó inicialmente la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en el municipio. De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, el expediente queda en exposición pública en Secretaría durante el plazo de un mes a efectos de reclamaciones.

Arnuero a 4 de febrero de 1993.—El alcalde (ilegible).

93/14248

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA

ANUNCIO

Por decreto de la Alcaldía de hoy, han sido aprobados los documentos que a continuación se relacionan y correspondientes al ejercicio de 1993:

—Padrón de contribuyentes del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

—Padrón de contribuyentes de la tasa por recogida de basuras, primer semestre.

Lo que se hace público para conocimiento de los legítimos interesados, significando que dicho documento está a disposición de los contribuyentes en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado e interponer las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de un mes a contar desde la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Rionansa, 26 de enero de 1993.—El alcalde (ilegible).

93/12252

4. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

ANUNCIO

En relación con el expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la cesión de una parcela en Monte, barrio San Miguel, 51 C al Ministerio de Educación y Ciencia, destinada a la construcción de un centro de enseñanza secundaria, se somete el expediente a información pública por plazo de quince días contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria», período durante el cual el

expediente estará a disposición de los interesados en la Sección de Patrimonio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Santander, febrero de 1993.—El alcalde (ilegible).

93/12269

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de octubre de 1992, ha aprobado el estudio de detalle promovido por «Promiera, S. L.» conforme al proyecto redactado por el arquitecto don Carlos Casanueva Ramos, visado el 29 de septiembre de 1992 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y abrir un período de información pública por término de quince días de conformidad con el artículo 4.1 del Real Decreto Ley 31/1980, de 14 de marzo.

Medio Cudeyo a 6 de noviembre de 1992.—El alcalde (ilegible).

92/91157

AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA

EDICTO

Por doña María José Magaldi Díaz se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de estabulación ganado bovino en el barrio de Rivero, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial de Cantabria».

San Felices de Buelna, 22 de enero de 1993.—El alcalde, José A. González Fernández.

93/8094

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2. Anuncios de Tribunales y Juzgados

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Sala de lo Contencioso Administrativo

EDICTO

Se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos administrativo impugnados y de quienes tuvieren intereses directos en el mantenimiento de los mismos, que por las personas y Entidades que se relacionan a continuación se han formulado recursos contencioso-administrativos contra los actos reseñados, a los que han correspondido los números que se indican de esta Sala:

1421/92.— DOÑA JUDIA RUIZ PEREZ contra la resolución de fecha 12.08.92 la DIRECCION GENERAL INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES desestimando el recurso de reposición denegando el derecho de percibir el Subsidio de Garantía de Servicios mínimos.

1616/92.— DOÑA MARIA MONTSERRAT VALBUENA MARCOS contra resolución de fecha 24.06.92 del MINISTERIO DE ASUNTOS

SOCIALES, sobre adjudicación entre otras, de una plaza de oficial Administrativo del Ministerio de Asuntos Sociales.

31/93.- MAJOCATEVI, S.A. contra la resolución de fecha 28.10.92, por la que se desestima recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la resolución de la DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE CANTABRIA de fecha 12.02.92, por la que se impone sanción laboral.

32/93.- DOÑA MARIA EUGENIA FRAILE SANCHEZ contra la resolución de la DIRECCION GENERAL DE TRAFICO por la que se desestima recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria por la que se acuerda imponer una sanción y suspensión de carnet de conducir durante el plazo de un mes con motivo de una presunta infracción del art. 19 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

33/93.- DOÑA MARIA LUISA CRUZ ARENAS contra la resolución dictada por la DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, de fecha 27.10.92 por la que se desestima recurso de alzada interpuesto contra resolución de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social por la que se confirma expediente E-904/91, Acta nº 1643/91, sobre sanción laboral.

34/93.- DON JOSE ANTONIO DONOSTI MONTERO contra la resolución de fecha 29.12.92 de la DIRECCION GENERAL DE EMPLEO por la que se desestima recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección Provincial de Trabajo de Cantabria de fecha 16.4.92 por la que se sanciona al recurrente con la extinción del seguro de desempleo con exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica del mismo durante un período de un año y devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

35/93.- DON FRANCISCO JARILLO PINO contra la resolución dictada por la DIRECCION GENERAL DE EMPLEO por la que se desestima recurso de alzada interpuesto en fecha 13.04.92 por la que se sancionaba al recurrente con la extinción del seguro de desempleo con exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica del mismo durante un período de un año y devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

36/93.- CONSTRUCCIONES SELAYA, S.L. contra la denegación expresa del recurso de reposición de fecha 19.11.92 por el requisito establecido pro acuerdo de la Comisión de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA de fecha 8.7.92 por el que se exige a la recurrente la instalación de una depuradora de agua residuales entre la urbanización y la acometida a la red general de saneamiento.

37/93.- DON CARLOS LANZA ARIAS contra la resolución de la DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS de fecha 4.06.92 dictado sobre infracción grave por retención a bordo de pescado con dimensión inferior a la talla reglamentaria y accesorios legales, así como contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto en fecha 21.08.92.

38/93.- DON JOSE ANTONIO CALVO SANOVEÑA Y DON AQUILES RODRIGUEZ DIAZ contra la resolución de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA de fechas 1.12.92 y 3.11.92 por las que se desestiman el recurso de reposición interpuesto, reclamando el derecho al percibo de la gratificación de turnicidad.

41/93.- ORGANIZACIONES NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES contra la resolución de fecha 30.10.92 adoptada por la DIRECCION GENERAL DE TRABAJO nº 23.076/92, sobre sanción laboral.

42/93.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA RESIDENCIA VIRGEN NIÑA DE MARRON-AMPUERO contra el acuerdo de fecha 5.11.92, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto en el que se oponían a la instalación de una fábrica de conservas en el recinto del antiguo ferrial, aprobado por la Comisión de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE AMPUERO en fecha 25.08.92.

45/93.- DON ANTONIO BARRUL JIMENEZ contra la resolución de fecha 16.10.92, dictada por el MINISTERIO DEL INTERIOR desestimatoria del recurso de reposición previamente promovido por el recurrente en fecha 1.04.92, ratificando otra anterior, denegando aquél la Licencia de Armas Tipo B.

46/93.- DON CESAR SAIZ ALONSO contra la liquidación practicada núm. 192/92 en concepto de Impuesto Municipal de Incremento de Valor de los Terrenos en el AYUNTAMIENTO DE LAREDO por un total de 577.722 pesetas, así como contra el acuerdo adoptado con fecha 26.10.92 por la Comisión de Gobierno de dicho Ayuntamiento, por el que se acordó desestimar el recurso de reposición.

47/93.- DOÑA TERESA DE LA CALVA MARTINEZ contra la resolución de fecha 30.10.92, dictada por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, recaída en el expte. nº 13.019/92, proveniente del Acta de Infracción nº. 90/92, por la que se confirma la sanción consistente en "exclusión a percibir cualquier prestación de desempleo y, en su caso ayuda al fomento de empleo durante un año", impuesta en la resolución de fecha 27.03.92.

50/93.- DON ENRIQUE HERRERO GANCEDO contra la resolución sancionadora, expte, nº 306/88, y contra la denegación tácita por silencio administrativo de la solicitud de declaración de nulidad de dicha resolución presentada ante la DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA (Consejería de Ganadería, Pesca y

Agricultura), así como contra la resolución desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposición contra la citada resolución.

51/93.- DON JOSE LUIS LOZANO POLO contra la resolución de fecha 24.06.92 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES, por la que se hizo pública la lista de aprobados del concurso-oposición para cubrir plazas laborales del INSERSO en la Provincia de Cantabria.

52/93.- DON FERNANDO BARROS GOMEZ contra el Acuerdo de fecha 31.07.92 del AYUNTAMIENTO DE ARNUERO por el que se archiva la denuncia presentada por el recurrente en relación al expte. promovido por D. Eugenio Cuesta Gutierrez para construcción de vivienda unifamiliar.

53/93.- DOÑA CONCEPCION OBREGON CUESTA contra la resolución de la Comisión de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA de fecha 31.10.92, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra la cuenta de gastos del Expediente de Demolición, por Ejecución Subsidiaria, de edificio en ruina en el pueblo de Obregón.

54/93.- DON MARCOS DIAS PEREZ contra la resolución de fecha 25.06.92 y contra la resolución de fecha 30.12.92, dictada por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL desestimatoria del recurso de alzada interpuesta contra la anterior.

55/93.- DON CARLOS GOMEZ RUIZ contra la resolución de fecha 30.12.92, recaída en el expte. nº 14.885/92, del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, proveniente del acta de Infracción nº 140/92, por la que se confirma la sanción consistente en "reintegro de las cantidades indebidamente percibidas de la prestación desempleo y, exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica, y en su caso ayuda al fomento de empleo durante un año".

57/93.- PERGILSA, S.A., contra la resolución de fecha 13.11.92 del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección de Trabajo de Cantabria de fecha 1.06.92, por la que se impuso la sanción de 4.000.000 pesetas.

58/93.- DON CARLOS ENRIQUE CACHO PALACIO contra la resolución de fecha 10.09.92, dictada por el MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA por el que se elevan a definitivas las listas para cubrir, en régimen de interinidad, las necesidades que puedan producirse en el Curso 1.992/93, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, en su norma general 12, y no haber sido incluido en las referidas listas.

59/93.- DOÑA CARMEN RANEDO MARTINEZ, DOÑA MARIA PILAR ALVAREZ GUIMERANS, DOÑA MARIA JESUS BLANCO MARTINEZ Y DON ALFONSO DE LA VEGA GONZALEZ contra la resolución de fecha 7.09.92, dictada por el MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA por la que se elevan a definitivas las listas para cubrir, en régimen de interinidad, las necesidades que puedan producirse, en el Curso 1.992/93, en los centro Públicos Docentes de Preescolar, Educación General Básica y Educación Especial, según establece la orden de 5.05.92, en su norma Gral. XV, y no haber sido incluidos en las referidas listas.

60/93.- CORBALAN DECORACION S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA que por silencio, se desestima la reclamación formulada en 7.11.91, y cuya denuncia de mora se efectuó en 30.04.92, sobre abono del precio del contrato de suministro de insignias con el escudo de Santoña, por un importe de principal de 280.784 Ptas., mas los intereses legales oportunos.

61/93.- DON JUAN CARLOS SANTANDER REVUELTA, contra la resolución de fecha 5.11.92, dictado por el MINISTERIO DE DEFENSA por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Centro de Reclutamiento de Cantabria que clasificó útil y apto al recurrente.

62/93.- DON ANTONIN DE LA RUA GAGO contra la desestimación presunta por aplicación del silencio administrativo de la denuncia y petición a la DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA y respecto del que se denunció la mora el día 8.05.92.

63/93.- TREINTA Y OCHO, S.A. contra el Acuerdo de fecha 20.11.92, expediente 2086-E/91, dictada por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

65/93.- DON ANDRES JORGE PACHECO BALLARIN contra la resolución definitiva de la DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por la que se determinaba una pérdida del 20% en el complemento de productividad para el tercer trimestre de 1991, cuantificado, a efectos del recurso contencioso administrativo, en 73.486 Pts.

66/93.- DOÑA ANGELA DE LA HERA CUADRIELLO contra la resolución de fecha 30.11.92, dictada en expte. nº 18290/92, por la que desestima recurso de alzada interpuesto contra otra de la DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de Santander, de fecha 27.05.92, que recayó en expte. E-130/92.

68/93.- ALCATEL STANDARD ELECTRICA, S.A, contra la resolución de fecha 20.11.92 de la DIRECCION GENERAL DE ORDENACION JURIDICA Y ENTIDADES COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre liquidación de cuotas.

70/93.- DON FRANCISCO SANCIBRIAN MUÑOZ contra la resolución de fecha 13.11.92, por la que se desestima recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la DIRECCION GENERAL DE TRAFICO de 24.04.92, por la que se recurria la sanción impuesta por la Jefatura Interior de fecha 23.05.92, consistente en una multa de 50.000 Ptas. y la suspensión de su autorización para conducir durante un periodo de dos meses.

72/93.- DON SANTIAGO PELAYO LASO contra la resolución de fecha 13.11.92 de la SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS DEL MOPU desestimatoria del recurso interpuesto contra la resolución dictada en fecha 17.12.91 por el Delegado del Gobierno en Cantabria, sobre impugnación de sanción de la Ley de carreteras.

74/93.- DON RAFAEL MARGALLO TORAL contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL MEC de fecha 7.7.92, mediante la cual se hizo pública la valoración de méritos de los participantes en el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado por Orden Ministerial de 5.05.92.

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de quienes con arreglo a los artículos 60, 64 y 66 en relación con los 29-b y 30 de la Ley de esta Jurisdicción, puedan comparecer como codemandados o coadyuvantes en los indicados recursos.

En la ciudad de Santander, a dos de Febrero de mil novecientos noventa y tres.

EL SECRETARIO,



93/13154

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

EDICTO

Se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos administrativo impugnados y de quienes tuvieren intereses directos en el mantenimiento de los mismos, que por las personas y Entidades que se relacionan a continuación se han formulado recursos contencioso-administrativos contra los actos reseñados, a los que han correspondido los números que se indican de esta Sala:

1694/92.- DON RAMON MANCEBO OSORIO contra la resolución de fecha 23.09.92 del MINISTERIO DE DEFENSA, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 13.11.91 de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, por la que se denegaba la compatibilidad en la percepción de las pagas extraordinarias correspondientes a los haberes en condición de Mutilado y la correspondiente a la Seguridad Social.

1696/92.- DON BENITO CORTAZAR RUIZ contra la resolución de fecha 23.09.92 del MINISTERIO DE DEFENSA, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 13.11.91 de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, por la que se denegaba la compatibilidad en la percepción de las pagas extraordinarias correspondientes a los haberes en condición de Mutilado y la correspondiente a la Seguridad Social.

1698/92.- DON FELIPE GONZALEZ OYAGUEZ contra la resolución de fecha 23.09.92 del MINISTERIO DE DEFENSA, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 13.11.91 de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, por la que se denegaba la compatibilidad en la percepción de las pagas extraordinarias correspondientes a los haberes en condición de Mutilado y la correspondiente a la Seguridad Social.

1757/92.- DON ANGEL LUIS AMIEVA GONZALEZ contra la resolución de fecha 01.10.92 de la UNIVERSIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto el día 10.06.92, en donde se considera procedente la convalidación de la asignatura "Sociología de la Empresa".

1781/92.- DON LUIS FERNANDEZ HERRERA contra la resolución de fecha 21.10.92 del AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA.

67/93.- DOÑA MARIA ISABEL FERNANDEZ VALLEJO contra la resolución de fecha 08.10.92 del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, por la que se adscribe a la funcionaria recurrente a las antiguas escuelas de Camarreal (Peñacastillo), así como contra la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la citada resolución.

71/93.- PROMOTORA ARPASAN, S.A. contra la desestimación presunta del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación practicada por el concepto de Licencia Urbanística para la construcción de un Aparthotel-Carretera Albericia-Sardinero, expediente 378/88.

73/93.- DON JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ contra la desestimación presunta del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del MEC, de 07.07.92, mediante la cual se hizo pública la valoración de méritos de los participantes en el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, convocado por Orden Ministerial de 05.05.92.

75/93.- DON FERNANDO GONZALEZ-RIANCHO BEZANILLA Y DOÑA ASUNCION RIVERO TEZANOS contra resoluciones de fechas 30.07.92 del TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA, en las reclamaciones económico-administrativas números 865/91 y 864/91, interpuestas contra liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda Especial de Cantabria por el concepto de intereses de demora por ingreso fuera de plazo, sin requerimiento, correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1988.

76/93.- DON JOSE RAMON SARABIA CERVERA contra la resolución de fecha 26.11.92 del CONSEJO GRAL. DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS DE ESPAÑA, denegatoria del recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria de fecha 27.02.92, por la que se ordenó el archivo del expediente de apertura de nueva oficina de farmacia en el municipio de Santander, por la falta de ingreso de la cantidad de 40.000,- pesetas requerida en "concepto de provisión de fondos y para atender a los gastos de tramitación del expediente".

78/93.- DON PEDRO LOPEZ CHACARRA PEREZ contra resolución de fecha 13.11.92 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, por la que se desestima recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de 29.05.92, relativa a la petición de reversión de una superficie de 725 metros cuadrados de terreno expropiado.

80/93.- DON CARMELO GUTIERREZ DE LA FUENTE contra la resolución del Vicerector de Investigación de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, de fecha 25.11.92, en virtud de la cual se deniega la reanudación de la condición de becario con la prestación económica inherente para la realización del proyecto de Investigación titulado "Industrialización de la Comarca de Campoo", reconocida por resolución del Rector de la Universidad de Cantabria de fecha 02.01.88.

81/93.- DOÑA MARIA TERESA DIAZ SANTOS contra la denegación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la denegación presunta por silencio administrativo del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, sobre la aplicación a la recurrente en concepto de haberes, del cuarenta por ciento del incentivo base por especial cualificación informática.

82/93.- DON RAMON FERNANDEZ SALAS contra la resolución de fecha 10.12.92 del TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA, por la que se desestima reclamación interpuesta contra los acuerdos de la Administración de Reinosa de la Agencia Estatal de Admón. Tributaria, por los que se denegaba la solicitud de devolución de ingresos indebidos por el concepto de IRPF de los ejercicios de 1986 a 1989.

83/93.- DON MANUEL ROBA CRESPO contra la resolución de fecha 30.11.92 del TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA, por la que se desestima reclamación interpuesta contra los acuerdos de la Administración de Reinosa de la Agencia Estatal de Admón. Tributaria, por los que se denegaba la solicitud de devolución de ingresos indebidos por el concepto de IRPF de los ejercicios de 1985 a 1990.

84/93.- DON HONORIO GONZALEZ GARCIA contra la resolución de fecha 10.12.92 del TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA, por la que se desestima reclamación interpuesta contra los acuerdos de la Administración de Reinosa de la Agencia Estatal de Admón. Tributaria, por los que se denegaba la solicitud de devolución de ingresos indebidos por el concepto de IRPF de los ejercicios de 1986 a 1989.

85/93.- DON PRUDENCIO RIOS GUERRA contra la resolución de fecha 10.12.92 del TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA, por la que se desestima reclamación interpuesta contra los acuerdos de la Administración de Reinosa de la Agencia Estatal de Admón. Tributaria, por los que se denegaba la solicitud de devolución de ingresos indebidos por el concepto de IRPF de los ejercicios de 1986 a 1989.

86/93.- DON JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ contra el silencio negativo de la administración, MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, por el que se deniega el derecho a estar incluido en la "Nómina de Pago Delegado de Centros Concertados", respecto al puesto de Profesor de Educación Física en el Centro Cibcertado "San Vicente de Paul", en la localidad de Limpas.

88/93.- DON JUAN DOMINGUEZ MEDINA contra silencio administrativo de la DIRECCION TECNICA DE LA MUTUALIDAD NACIONAL DE PREVISION DE LA ADMINISTRACION LOCAL, de la solicitud de pensión de jubilación por incapacidad.

90/93.- DOÑA BEATRIZ CARRANCEJA DIEZ contra la desestimación presunta por silencio administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA, del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Director General de Asuntos de Personal de fecha 24.01.92, por el que se desestima la petición presentada por la recurrente en fecha 19.12.1991 solicitando el reintegro de una serie de cantidades abonadas por la misma como consecuencia de un error material de dicho Ministerio.

92/93.- DOÑA SILVIA RUFINO VENERO contra la resolución de la Comisión de Gobierno de la ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA, de fecha 17.11.92, recaída ante el recurso de reposición interpuesto el 05.11.92, en materia de nombramiento como funcionaria, a la espera de vacante.

93/93.- DON MARCOS FERNANDEZ DIEZ contra la resolución de la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO MILITAR, sobre declaración de apto para la prestación del servicio militar, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada por la Junta de Clasificación y Revisión de Cantabria en el expediente nº 1159.

94/93.- DON JUAN LUIS PACHECO PEREZ contra la desestimación por silencio administrativo del MINISTERIO DEL INTERIOR, del recurso de alzada formulado contra la resolución dictada por el Director General de la Guardia Civil el día 13.08.92, en virtud de la cual se le denegaba al recurrente la renovación del permiso de armas.

95/93.- DOÑA MARIA CONCEPCION HIGUERA DE LA CALLE contra la resolución del Director del Centro Asociado de la UNIVERSIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA en Cantabria de fecha 05.01.91, sobre cobertura de plaza en la UNED.

96/93.- REPRESENTACIONES CASTELLANOS, S.A. contra resoluciones denegatorias por silencio administrativo del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social recaídas en el expediente de referencia S-794-91, Acta 25-1464-91, por la que se acuerda imponer sanción motivada por infracción, y en el expediente L-85-91, Acta 25-350-91 que confirme el Acta de Liquidación de Cuotas.

98/93.- DON JOSE MARIA ORTEGA DE CELIS contra la resolución por silencio administrativo del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER de la petición dirigida en la que se instaba a la Alcaldía a proceder al restablecimiento de la legalidad urbanística en los términos del artículo 184, 4º de la Ley del Suelo, instruido contra Don Pedro Moreno Ruiz a instancias del recurrente, por obras ilegales.

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de quienes con arreglo a los artículos 60, 64 y 66 en relación con los 29-b y 30 de la Ley de esta Jurisdicción, puedan comparecer como codemandados o coadyuvantes en los indicados recursos.

En la ciudad de Santander, a 8 de febrero de 1.993.



93/14914

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 1.161/91

Por tenerlo así acordado su señoría el ilustrísimo señor magistrado del Juzgado de lo Social Número Uno de Cantabria, por providencia del día de la fecha, en autos de cantidad seguidos a instancias de don José Mazo Navarro contra «Agua y Jardines de Cantabria, Sociedad Anónima», con el número 1.161/91, ejecución número 11/93.

Se hace saber: Que en los presentes autos se ha dictado auto que literalmente dice así:

«Procede declarar a la ejecutada «Agua y Jardines de Cantabria, S. A.», en situación de insolvencia legal con carácter provisional por importe de 330.000 pesetas. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos

como provisional y procedase al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que, frente a la misma, cabe recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles ante este Juzgado.

Una vez firme, librese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial».

Y para que sirva de notificación a «Agua y Jardines de Cantabria, S. A.», actualmente en desconocido paradero, y demás partes interesadas en este proceso particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial de Cantabria», y en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación procesal, se expide el presente, en Santander a 21 de enero de 1993.—El secretario (ilegible).

93/8216

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 160/93

Por tenerlo así acordado su señoría el ilustrísimo señor magistrado de lo social número uno de Cantabria, en providencia de esta fecha, dictada en autos del número 160/93, seguidos a instancias de doña Montserrat Gómez Rodríguez, contra «Procosa, S. A.», en reclamación por despido.

Se hace saber: Que se señala el día 10 de marzo, a las once veinte horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, subsiguiente juicio, que tendrán lugar ante la sala de audiencias de este Juzgado, debiendo de comparecer las partes en el día y hora señalados, quedando advertidas de que deberán hacerlo con todos los medios de prueba de que intenten valerse y de que es única citación, no suspendiéndose la vista por falta de comparecencia de alguna de ellas, debidamente citadas.

Y para que sirva de citación a «Procosa, S. A.», actualmente en desconocido paradero, y demás partes interesadas en este proceso particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial», y en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación procesal, se expide el presente, en Santander a 5 de febrero de 1993.—El secretario (ilegible).

93/14275

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 693/92

Por tenerlo así acordado su señoría el ilustrísimo señor magistrado de lo social número uno de Cantabria, en providencia de esta fecha, dictada en autos del número 693/92, seguidos a instancias de doña María

Fernanda Murillo Arnela, contra INSALUD, en reclamación de cantidad.

Se hace saber: Que se señala el día 11 de marzo, a las once horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, subsiguiente juicio, que tendrán lugar ante la sala de audiencias de este Juzgado, debiendo de comparecer las partes en el día y hora señalados, quedando advertidas de que deberán hacerlo con todos los medios de prueba de que intenten valerse y de que es única citación, no suspendiéndose la vista por falta de comparecencia de alguna de ellas, debidamente citadas.

Y para que sirva de citación a doña María Fernanda Murillo Arnela, actualmente en desconocido paradero, y demás partes interesadas en este proceso particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial», y en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación procesal, se expide el presente, en Santander a 3 de febrero de 1993.—El secretario (ilegible).

93/14268

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 581/92

Por tenerlo así acordado su señoría el ilustrísimo señor magistrado de lo social número uno de Cantabria, en providencia de esta fecha, dictada en autos del número 581/92, seguidos a instancias de don Fernando Díez Díez y otros, contra «Castellano Cantabria de Hostelería, S. L.», en reclamación de cantidad.

Se hace saber: Que se señala el día 24 de marzo, a las nueve treinta horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, subsiguiente juicio, que tendrán lugar ante la sala de audiencias de este Juzgado, debiendo de comparecer las partes en el día y hora señalados, quedando advertidas de que deberán hacerlo con todos los medios de prueba de que intenten valerse y de que es única citación, no suspendiéndose la vista por falta de comparecencia de alguna de ellas, debidamente citadas.

Y para que sirva de citación a don Miguel Obregón Polidera, actualmente en desconocido paradero, y demás partes interesadas en este proceso particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial», y en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación procesal, se expide el presente, en Santander a 29 de enero de 1993.—El secretario (ilegible).

93/11049

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 544/92

Por tenerlo así acordado su señoría el ilustrísimo señor magistrado de lo social número uno de Cantabria, en providencia de esta fecha, dictada en autos del número 544/92, seguidos a instancias de don Manuel

Cagigas Hermosa, contra «Fitrebol, S. L.», en reclamación de cantidad.

Se hace saber: Que se señala el día 31 de marzo, a las diez veinticinco horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, subsiguiente juicio, que tendrán lugar ante la sala de audiencias de este Juzgado, debiendo de comparecer las partes en el día y hora señalados, quedando advertidas de que deberán hacerlo con todos los medios de prueba de que intenten valerse y de que es única citación, no suspendiéndose la vista por falta de comparecencia de alguna de ellas, debidamente citadas.

Y para que sirva de citación a «Fitrebol, S. L.», actualmente en desconocido paradero, y demás partes interesadas en este proceso particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial», y en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación procesal, se expide el presente, en Santander a 5 de febrero de 1993.—El secretario (ilegible).

93/14274

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 1.238/91

Por tenerlo así acordado su señoría ilustrísima el señor magistrado del Juzgado de lo Social Número Uno de Cantabria, por providencia del día de la fecha, en autos de prestación, seguidos contra INSS, Tesorería, «Dimensión Industrial, S. A.», «Construcciones Faro, Sociedad Anónima» y don Cesáreo Calvo Martín.

Se hace saber: Que en los presentes autos se ha dictado providencia que, literalmente, dice así:

«Dada cuenta, el anterior oficio únase a los autos de su razón; dese traslado de copia del mismo a las partes por término de tres días para que aleguen lo que a su derecho convenga y, verificado, déjense los autos sobre la mesa del proveyente para dictar sentencia».

Y para que sirva de notificación a don Cesáreo Calvo Martín, actualmente en desconocido paradero, y demás partes interesadas en este proceso particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación procesal, artículo 59 L. P. L., advirtiéndose que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deben revestir forma de auto o sentencia o se trate de un emplazamiento, se expide el presente, en Santander a 2 de febrero de 1993.—El secretario (ilegible).

93/12445

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE CANTABRIA

Expediente número 1.232/91

Doña Mercedes Díez Garretas, secretaria del Juzgado de lo Social Número Dos de Cantabria,

Doy fe: Que en los autos seguidos bajo el número 1.232/91, a instancia de doña Eloísa Cuadrado Ceballos, contra «Puertas Metálicas Jan, S. A.». vecina

de San Andrés de la Barca (Barcelona), sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice así:

Fallo: Que estimando sustancialmente la demanda formulada por doña Eloísa Cuadrado Ceballos frente a «Puertas Metálicas Jan, S. A.», condeno a esta empresa a abonar a la actora la cantidad de 228.885 pesetas por los conceptos arriba referenciados, más el 10 % anual de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma no cabe recurso.

Y para que conste y su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria» a fin de que sirva de notificación en legal forma a la demandada «Puertas Metálicas Jan, S. A.», actualmente en ignorado paradero, expido el presente, en Santander a 3 de febrero de 1993.—La secretaria, Mercedes Díez Garretas.

93/12291

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 1.046/91

Don Ramón Pajarón García, secretario, sustituto, del Juzgado de lo Social Número Dos de Cantabria,

Doy fe y certifico: Que en los autos número 1.046/91, seguidos por don César Santiago Fernández Rocillo, contra el INSS y otros, en reclamación por otros conceptos, ha recaído en fecha 1 de febrero de 1993, providencia cuyo tenor literal es el siguiente:

«Providencia del magistrado señor Durán Valdés, sustituto.—En Santander a 1 de febrero de 1993. Vista la anterior diligencia y escrito presentado, únase éste a los autos de su razón, se tiene en su vista por anunciado por la parte demandada, INSS y Tesorería, recurso de suplicación en tiempo y forma contra la sentencia dictada. Adviértase al letrado designado por la parte recurrente que quedan a su disposición los autos en la Secretaría de este Juzgado de lo Social para que en el plazo de una audiencia a contar del siguiente día de la notificación se haga cargo de ellos y formalice el recurso por escrito en el plazo de diez días hábiles siguientes, que correrá cualquiera que sea el momento en que los retire, y que, de no efectuarse dentro del mismo, se tendrá a la recurrente por desistida de dicho recurso. Y dese traslado del anuncio a las restantes partes. Lo acordó y firma su señoría, de lo que doy fe. Firmado: Don Juan Durán (rubricado). Firmado: Don Ramón Pajarón (rubricado).

Y para que conste y sirva de notificación a «Electrodán, S. A.», actualmente en ignorado paradero, expido el presente, en Santander a 1 de febrero de 1993.—El secretario, sustituto, Ramón Pajarón García.

93/11051

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE CANTABRIA

EDICTO

Expediente número 327/92

Don Ramón Pajarón García, secretario en funciones del Juzgado de lo Social Número Dos de Cantabria,

Que ante este Juzgado de lo Social se siguen actuaciones bajo el número arriba referenciado, seguidas a instancia de don Agustín Hernández Miranda, contra «Mutua Patronal Auxini» y otros, en reclamación por accidente, en las que se ha dictado auto del tenor literal siguiente:

Que procede aclarar el fallo de la sentencia dictada con fecha 28 de diciembre de 1992, en el sentido de omitir la frase final, quedando el dicho fallo con la siguiente redacción: Que con estimación de la demanda interpuesta por don Agustín Hernández Miranda, contra «Auxini Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo», Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería, debo declarar y declaro que la situación incapacitante del actor dimana del accidente sufrido por el mismo el 25 de enero de 1990 y condeno a las demandadas a estar y pasar por tal declaración y correr con las consecuencias que se siguieren de la misma.

Y para que sirva de notificación a «Auxini Mutua Patronal», actualmente en paradero desconocido, expido y firmo el presente, en Santander a 2 de febrero de 1993.—El secretario, Ramón Pajarón García.

93/13160

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA

TARIFAS

	PTA
Suscripción anual	14.100
Suscripción semestral	7.041
Suscripción trimestral	3.525
Número suelto del año en curso	96
Número suelto de años anteriores	150

Las tarifas se incrementarán con el preceptivo porcentaje del IVA (artículo 57.1.4.º del Reglamento): 3 %

Anuncios e inserciones:

a) Por palabra	38
b) Por línea o fracción de línea en plana de tres columnas	200
c) Por línea o fracción de línea en plana de dos columnas	338
d) Por plana entera	33.800

Las tarifas se incrementarán con el preceptivo porcentaje del IVA (artículo 56 del Reglamento): 15 %

Boletín Oficial de Cantabria

Edita: Diputación Regional de Cantabria. Administración: Casimiro Sainz, 4. 39003-Santander. Teléfonos: 20.71.51 - 52 - 53. Fax: 20.71.46
 Imprime: Imprenta Regional de Cantabria. General Dávila, 83. 39006-Santander. Teléfono 23.95.82. Fax 37.64.79
 Inscripción: Registro de Prensa, Sección Personas Jurídicas, tomo 13, folio 202, número 1.003. Dep. Legal: SA-1-1958